

REPÚBLICA ARGENTINA
DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

16ª REUNION — Continuación de la 5ª SESION ORDINARIA — JULIO 29 DE 1992

**Presidencia de los señores diputados Luis Alberto Martínez
y Mario Carlos Brook**

**Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla**

**Prosecretarios: doctores Juan Estrada y Norberto Bruno
y señor Juan Carlos Stavale**

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEROLAZA, Florencio Gilberto
ACEVEDO, Julio César
ADAIME, Felipe Teófilo
AGUADO, Jorge Rubén
AGONDEZ, Jorge Alfredo
ALABI, Ernesto Salim
ALCALA, Néstor Ricardo
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ ECHAGUE, Raúl Ángel
ARIAS, César
ARMENDARIZ, Alejandro
AYALA, Juan Carlos
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BARBERA, Eliseo
BASSANI, Ángel Marcelo
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BELTRAN, Carlos Roberto
BENEDETTI, Jorge Enrique
BERHONGARAY, Antonio Tomas
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Oscar Alberto
BORDA, Osvaldo
BORDIN CAROSIO, Hugo Antonio
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BREARD, Noel Eugenio
BROOK, Mario Carlos
BRUNATI, Luis Pedro
BRUZZO, Omar Abdulló
CABRERA, Gerardo Ángel
CAFIERO, Juan Pablo
CAIMMI, Fernando Enrique
CALLEJA, Ovidio Amílcar
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMANO, Graciela
CAPUTO, Dante Mario
CARRERAS, Porfirio Mario
CASARI de ALARCIA, María Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Anibal

CEBALLOS, Walter Alberto
CLÉRICI, Federico
COSSOS PÉREZ, Juan Nicolás
CROSTELLI, Juan Carlos
CRUZ, Washington Jesús
D'ALESSANDRO, Miguel Humberto
D'AMBROSIO, Ángel Mario
DAUD, Jorge Carlos
DE LA RÚA, Fernando
DE MARTINO, Víctor Amador
DUBRIEU, Marcela Margarita
DUSSOL, Ramón Adolfo
ECHEVARRÍA, Luis María
ELÍAS, Ángel Mario
ENDEIZA, Eduardo Anibal
ESTEVEZ BOERO, Guillermo Emilio
FELLNER, Eduardo Alfredo
FERNÁNDEZ, Anibal
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo Carlos
FESCINA, Andrés Julián
FIGUEROA, Pedro Octavio
FOLLONI, Jorge Oscar
FONTELA, Moisés Eduardo
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Pedro Alberto
GARCÍA CUERVA, Ignacio Santiago
GATTI, Héctor Ángel
GAUNA, Juan Octavio
GERMANO, Alberto Raúl
GIOJA, José Luis
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ, José Ernesto
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos Enrique
GONZÁLEZ, Oscar Félix
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás Walther
GONZÁLEZ GASS, Gabriela Marta
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Antonio Isaac
HARDY, Anibal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERNÁNDEZ, Santos Abel
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA, Luis Fernando
HUMADA, Raúl
IBARBIA, José María
IBÁÑEQUE, Julio César
IRIBARNE, Alberto Juan Bautista

ITURRE, César Eusebio del Valle
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LÓPEZ de ZAVALÍA, Fernando Justo
LOSADA, Luis Enrique
LOUTAIF, Julio César
LYNCH, Carlos Alberto
MACHICOTE, Jorge Raúl
MANFREDOTTI, Carlos
MANNY, José Juan
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCÓ, Jorge Raúl
MARCOLLI, Juan Miguel Ángel
MARELLI, Mabel G. de
MARTÍNEZ, Luis Alberto
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Martín
MENEGHINI, Javier Reynaldo
MICHITTE, Salomón Antonio
MOLARDO, Elvio Francisco
MOLINAS, Ricardo Francisco
MONTEVERDE, Carlos Roberto
MOREAU, Leopoldo Raúl Guido
MOURE, Juan Manuel
MUNAGURRIA, Marcelo Julio
MUÑOZ, Marcelo Bernardo
NATALE, Alberto Adolfo
NINO, Jorge
NOVAU, Pedro José
OLIVERA, Enrique José
ORGAZ, Carlos Alfredo
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Ángel
PARADA, Alberto
PARENTE, Rodolfo Miguel
PAROLA, José María
PARRILLI, Oscar Isidro José
PEPE, Lorenzo Antonio
PESCE, Félix
PINTO, Guillermo
PIOTTI, Alberto Daniel
PRONE, Alberto Josué
PURICELLI, Arturo Antonio
RÉ, Ricardo Horacio
RODRIGO, Esteban Joaquín
RODRÍGUEZ, Jorge Alberto

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

ALBAMONTE, Alberto Gustavo
 FERRADAS, Miguel Enrique
 FLORES, Rafael Horacio
 GÓMEZ, Roque Julio César
 HERRERA ARIAS, Manuel H.
 IGLESIAS, Evaristo Constantino
 LÓPEZ, Jorge Antonio
 MARTIN de DE NARDO, Marta
 PRAT, Alfredo Ernesto
 PROFILI, Gerardo Pedro
 SAADI, Luis Alberto
 SAMID, Manuel Julio
 SOLA, Felipe Carlos
 TOMA, Miguel Angel
 VICCHI, Raúl Horacio
 ZAMBIANCHI, Carlos
 ZAMORA, Federico

AUSENTES, CON AVISO:

ABDALA, Germán Darío
 ACHEN, Antonio
 ALBERTI, Juan Carlos
 ALENDE, Oscar Eduardo
 ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
 ALVAREZ GARCIA, Normando M.
 AMADIO, Eduardo Pablo
 ARANDA, Saturnino Dantti
 ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
 AVELIN, Alfredo
 BAGLINI, Raúl Eduardo
 BARBOTTI, Atilio Ector
 BERICUA, Jorge
 BERMÚDEZ, María del Pilar
 CAMAÑO, Dante Alberto
 CANATA, José Domingo
 CAVALLARI, Juan José
 CORCUERO BLASCO, José Manuel

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

ALVAREZ, Héctor Claudio
 ARRECHER, José Salvador
 BAUM, Daniel
 BISCHOF, Enrique Alberto
 BODERO NIEVAS, Víctor Hugo

AUSENTE, CON LICENCIA:

DURANONA y VEDIA, Francisco de

CRAMARO, Hugo Arnaldo
 DI TULLIO, Héctor Horacio
 ESPECHE, Alberto Luis
 FALLETTI, Julio César José
 FELGUERAS, Ricardo Ernesto
 FERNÁNDEZ, Roberto Carlos
 FERNÁNDEZ, Roberto Enrique
 FERREYRA, Eduardo Mario
 FRIGERIO, Octavio Oscar
 GALVÁN, Raúl Alfredo
 GALLO, Orlando Juan
 GAN, Fernando Pascual
 GARCÍA de NOVELLI, María Cristina
 GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
 GONZÁLEZ, Luis Mario
 GUERRERO, Luis Serafín
 GUZMÁN, María Cristina
 JALLI, Luis Julián
 KOTH, Carlos
 LÓPEZ, Alcides Humberto
 MACHADO, Oscar Alfredo
 MAGGI, Juan Alberto
 MARCOS, Ricardo Ernesto
 MENDOZA, Claudio Ramiro
 MICHELLI, Marco Aurelio
 NACUL, Miguel Camel
 ORQUIN, Leopoldo Manuel
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 PERALTA, Anibal Pedro
 PICCININI, Ana Ida
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 QUEZADA, Rodolfo Héctor
 RAIMUNDI, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 RUCKAUF, Carlos Federico
 RUIZ, Angel Rafael
 SAADI, Ramón Eduardo
 SABIO, Juan Carlos
 SCIELZI, Carlos José
 SORIA ARCH, José María
 VARELA CID, Eduardo
 VAZQUEZ, Roberto
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 YOMA, Jorge Raúl

La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª reunión (Sesión preparatoria) de fecha 30 de abril de 1992.

SUMARIO

Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Finanzas, de Economía y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y modificación de la Ley de Entidades Financieras (97-S.-91).

—En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio de 1992, a la hora 16 y 23:

CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL Y MODIFICACION DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS (Continuación)

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa la sesión:

Prosigue la consideración en particular de los dictámenes de las comisiones de Finanzas, de Economía y de Presupuesto y Hacienda en el

proyecto de ley en revisión sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y modificación de la Ley de Entidades Financieras¹.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: tenemos dudas de que se pueda reunir quórum para votar los diversos artículos del proyecto de ley aprobado en general pues por comunicaciones mantenidas con varios miembros de nuestra bancada —es posible que en el resto de los bloques suceda algo similar— sabemos que existen dificultades para llegar a la Capital Federal pues hay algunos aeropuertos cerrados y retrasos en los vuelos a raíz de problemas climáticos.

¹ Véase el texto de los dictámenes en el Diario de Sesiones del 3 de julio de 1992. (Pág. 1204.)

De cualquier modo, por las consultas que hemos efectuado podemos decir que existe voluntad política de los bloques para trabajar. En ese sentido se ha acordado que los miembros informantes y los señores diputados vayan exponiendo en particular sobre la totalidad del articulado que todavía hay que votar, de forma tal de ir avanzando en la expresión de las posiciones de las diferentes bancadas, difiriéndose la votación para la oportunidad en que reglamentariamente podamos hacerla.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: los diputados presentes tenemos la voluntad de avanzar en la tarea parlamentaria, y en ese sentido es adecuado el procedimiento anunciado por el presidente del bloque mayoritario, o sea que se vayan exponiendo las distintas opiniones sobre los artículos pendientes de consideración y que cuando haya quórum se vote.

Sr. Presidente (Martínez). — Si no se formulan observaciones, se procederá en la forma indicada por el señor diputado por La Pampa.

—No se formulan observaciones.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración en particular el proyecto de ley aprobado en general desde el artículo 21 de la Carta Orgánica del Banco Central —incluido en el artículo 1º— en adelante, abriendo la lista de oradores para que se manifiesten las respectivas observaciones.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: entiendo que el dictamen debe considerarse a partir del artículo 20 inclusive, ya que éste aún no fue votado. En ese sentido solicito que se me permita volver a referirme a este artículo 20.

Sr. Presidente (Martínez). — Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se procederá en consecuencia.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Martínez). — Para volver a referirse al artículo 20, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: desco exponer brevemente la posición del bloque radical sobre los artículos 20 y 33 del dictamen de mayoría. Se trata de establecer cuáles son los límites a que deberá ajustarse el Banco Central para financiar al Tesoro. Según el dictamen de mayoría, los límites serían en primer lugar el crecimiento de las tenencias de títulos públicos del banco, a valor nominal, que no podrá ser superior al 10 por ciento por año ca-

lendario; y en segundo lugar, en forma concomitante con ese límite, la prohibición de superar el límite máximo dispuesto en el artículo 33. Dicho artículo 33 se refiere a la determinación de un 33 por ciento del total de las reservas como límite máximo para que los títulos públicos tengan participación en las reservas que respaldan la base monetaria.

Sobre esta propuesta contenida en el dictamen de mayoría nosotros tenemos objeciones, que ya hemos expuesto durante el tratamiento en general, pero específicamente las podemos sintetizar en lo siguiente: estos límites establecidos al Banco Central son, en primer lugar, insuficientes; también inapropiado y, por otra parte, a nuestro criterio, resultan inoportunos.

Decimos que son insuficientes porque no crean una valla protectora suficiente como para que efectivamente el Banco Central se abstenga de financiar al Tesoro salvo en los casos expresamente autorizados. Por el contrario, pareciera que se dejan abiertas muchas vías de escape durante la evolución del año calendario, dado que se está tomando en consideración, según el texto o en virtud de la interpretación más coherente del mismo, solamente el cierre del año calendario, existiendo la posibilidad de oscilaciones en la tenencia de títulos por parte del Banco Central, las que pueden ser muy significativas.

El hecho de pasar del 10 al 33 por ciento, que sería el tope máximo en la proporción de los títulos sobre las reservas, significa dos mil millones de dólares, con posibilidad de oscilaciones que habría durante el año calendario. Al final del año el Banco Central tendría efectivamente que ajustarse al crecimiento del 10 por ciento sobre el stock; pero todos conocemos —la experiencia argentina lo indica— la cantidad de veces que fue posible a través de financiaciones puente o recursos contables postergar el pago de algunas obligaciones en el tiempo, resolviéndose así las necesidades de financiación que tiene el Tesoro.

Por esas razones entendemos que esta disposición es insuficiente respecto al objetivo que se está buscando, que es el de establecer límites precisos a la financiación al Tesoro por parte del Banco Central.

No está de más recordar que existe también otra posibilidad de violar estas disposiciones, pero indudablemente no es la Carta Orgánica del Banco Central el instrumento adecuado para impedir violaciones a estas disposiciones a las que me estoy refiriendo.

Por otro lado, el artículo 20 y su correlato, el artículo 33, no establecen una metodología

aprobada pues en lo relativo al crecimiento del 10 por ciento se refieren al stock de títulos públicos. Tengo en mi poder un informe que contiene la evolución de ese stock y su relación con el total de las reservas, correspondiente al período iniciado con la implementación del plan de convertibilidad. Advierto que durante la mayor parte de los meses —salvo en dos de ellos— el stock de títulos públicos siempre ha estado por debajo del 10 por ciento, es decir, ajustándose a lo establecido en la ley de presupuesto.

La relación que se pretende determinar responde a un stock previo vinculado con las tenencias de fin de año. Esto no es lo adecuado porque no se tiene en cuenta, por ejemplo, la base monetaria ni el ritmo de crecimiento de la economía.

Por las razones que he expresado, entendemos que la propuesta que hiciéramos en su momento y sobre la que insistiéramos en el sentido de dejar librada la fijación del límite a la Ley de Presupuesto, es la más atinada.

Finalmente deseo hacer referencia a la inoportunidad de este artículo 20 y su correlato, el artículo 33, porque implican lisa y llanamente una flexibilización de la Ley de Convertibilidad. Ello, porque desde un punto de vista cualitativo se hace referencia a títulos públicos mientras que la Ley de Convertibilidad hace alusión a títulos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, divisas, etcétera. Consecuentemente podría llegarse a la paradoja de que pasivos del Banco Central sean respaldados por pasivos de la misma entidad.

Esta flexibilización de la Ley de Convertibilidad resulta patente y mucho más clara si se advierte que existe una solución alternativa, que justamente es la que nosotros estamos proponiendo: dejar librada a la determinación de la Ley de Presupuesto la fijación de los límites que se establecen en los artículos 20 y 33 de este proyecto de ley.

Justamente la Ley de Presupuesto es la que puede garantizar un destino apropiado en caso de que esta flexibilización se realice. La ley de leyes tiene una amplitud lo suficientemente abarcadora como para interpretar con precisión cuáles son las necesidades fiscales del año de que se trate, cuál es la demanda monetaria real y cuál el conjunto de circunstancias a ser tenido en cuenta a efectos de evitar que una flexibilización de la Ley de Convertibilidad pueda resultar contraria al objetivo de estabilidad, que es justamente el motivo de la sanción de esa norma.

Deseo cerrar este comentario señalando que nos estamos refiriendo a cifras importantes. Así, en caso de que del 10 por ciento se pase al 33 por ciento, esta flexibilización representaría alrededor de dos mil millones de pesos. Por esta razón nosotros insistimos en la conveniencia de derivar la fijación de estos límites a la ley anual de presupuesto.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: como usted bien ha dicho, este tema ha sido discutido y prácticamente agotado en la reunión anterior. Pero tal como lo ha señalado el señor diputado Olivera, es tan importante no sólo para el conjunto de la Cámara sino también para la sociedad argentina conocer qué es lo que vamos a resolver y cuáles son las consecuencias de las disposiciones que estamos tratando, que me parece necesario reiterar algunos conceptos. Aunque los señores diputados ya los conocen, vale la pena aclararlos para el conjunto de la sociedad argentina, que no quiere ver más desbordes en materia de financiamiento del Estado.

El señor diputado Olivera ha planteado que es posible una suerte de triquiñuela en la aplicación del artículo 20 referida a la facultad del Banco Central de incrementar las tenencias de títulos públicos hasta un 10 por ciento en forma anual; ha expresado que podría llegarse a cualquier cifra durante el año y aun así cumplirse con la prescripción al 31 de diciembre, acomodándose las tenencias al crecimiento del 10 por ciento.

Sr. Olivera. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Balestrini (M. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: quisiera aclarar que no he dicho que pueda llegarse a cualquier cifra. Está siempre por encima la proporción de un tercio de títulos públicos sobre las reservas.

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa en el uso de la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — ¿Cómo funciona el artículo 20? No existe ninguna posibilidad de que durante los meses del año se supere el límite establecido en la norma. Si su redacción no fuese suficientemente feliz a los fines de evitar esta circunstancia, quedaría en todo caso mi exposición como miembro informante para la debida interpretación de aquélla.

Lo que el artículo dice es que concluido un año, se conoce cuál es el stock de títulos públicos existentes. A partir de allí se aplica el tope máximo del 10 por ciento, que regula la cantidad fija que durante todo el año podrá utilizar el Banco Central para incrementar su tenencia de títulos públicos. Es absolutamente imposible que esta disposición se utilice en el sentido de que en un mes se supere el límite y en otro no se lo alcance.

Creo que con esta aclaración se soluciona la advertencia que hizo el señor diputado Olivera.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Mario Carlos Brook.

Sr. Martínez Raymonda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Balestrini (M. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: coincidentemente con la observación del señor diputado Olivera, quiero señalar que un intérprete importante, como es el propio presidente del Banco Central, planteó en un coloquio privado que efectivamente se podría jugar con la cifra —siempre con el tope del 33 por ciento— entre el 2 de enero y el 29 de diciembre de cada año. Por ello, a pesar de que la tradición jurisprudencial argentina reconoce que la opinión del miembro informante puede ser usada como base para la interpretación legal, me permito releer del artículo 20 su segundo párrafo: “El crecimiento de las tenencias de títulos públicos del banco, a valor nominal, no podrá ser superior al diez por ciento (10 %) por año calendario, ni superar el límite máximo impuesto en el artículo 33”.

Dada la exposición del señor miembro informante, podría ocurrir que si planteáramos esto eventualmente a un juez o a algún directorio del Banco Central se podría interpretar, por el juego de los dos topes, que en el medio se puede llegar al 33 por ciento porque una cosa se conecta con la otra.

Me parece auspicioso el esfuerzo realizado por el señor miembro informante para sustentar la posición de que este mecanismo no se usa para violar la Ley de Convertibilidad y emitir moneda, pero ello no alcanza, por lo que es necesario fijar con precisión en la norma lo que el señor diputado manifiesta a modo de interpretación.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: la interpretación de la norma está clara; para nosotros la redacción no deja lugar a dudas sobre cuál ha sido el espíritu que nos guió. Si se tratase exclusivamente de una cuestión de redacción, la comisión no tendría ningún problema en dejar expresamente planteado este criterio, con la terminología que se pudiera acordar; pero a nuestro juicio está absolutamente claro que el tope máximo de crecimiento en los títulos públicos es el 10 por ciento en cualquier momento, computado sobre la base del stock existente en el año anterior.

Con respecto a las explicaciones del señor diputado Olivera quiero dejar expresa constancia de que de ninguna manera estamos posibilitando el retorno al pasado con esta norma ni la violación de las disposiciones de la Ley de Convertibilidad. En tal sentido es suficiente hacer un cálculo muy sencillo de cuáles son las posibilidades de utilización de títulos públicos que concretamente tiene en la práctica el Banco Central, de acuerdo con estas disposiciones, para financiar al Estado, para darnos cuenta de que esas cifras nos ratifican lo que manifesté en la reunión pasada cuando tratábamos este mismo tema.

Por primera vez en la historia de la República Argentina se está estableciendo un límite absolutamente estrecho que da garantías totales y absolutas a la sociedad, de tal modo que estos despilfarros y desequilibrios utilizados en el pasado no volverán a tener cabida en nuestro país.

Por último, con relación a la propuesta formulada por el señor diputado Olivera en el sentido de que se deje librada a la Ley de Presupuesto la fijación de los topes, quiero expresar que la comisión está totalmente en desacuerdo con este punto de vista, por entender, en primer lugar, que esta norma necesita establecer con precisión y claridad hasta qué punto puede el Banco Central ser un instrumento de financiamiento. Aun teniendo en cuenta que una ley puede ser modificada por otra y que la de presupuesto puede modificar la Carta Orgánica del Banco Central o la Ley de Reforma del Sistema Financiero, lo que sí estamos estableciendo —y es para nosotros de vital importancia— es una regla de juego para el conjunto de los operadores económicos. Estamos diciendo a la sociedad argentina que nos vamos a basar en estas normas para el funcionamiento de la economía y que no las vamos a vulnerar.

Son reglas de juego fundamentales para contar con una economía previsible y un país en donde se puedan realizar operaciones a largo plazo sin depender de lo que dispongan los legisladores con respecto al financiamiento del Estado dado los efectos económicos que este tema trae aparejado.

Consideramos de vital importancia que esta norma sea incluida en el proyecto en consideración por cuanto funcionará como un límite permanente, racional y sensato de este instrumento de financiamiento.

Teniendo en cuenta la alta sensibilidad que este tema produce, el tiempo que vivimos —es decir, habiendo salido hace tan sólo unos meses de una profunda crisis— y la razón que asiste a los señores diputados en cuanto a poner límites para que no existan desbordes, la comisión ha consensuado una norma transitoria que sólo compete al futuro directorio que designemos y establece restricciones mucho más graves al sistema de financiamiento del Estado. Esta norma será incorporada como cláusula transitoria en uno de los últimos artículos del proyecto y mediante ella se dejará en claro cuál es el espíritu que han tenido en cuenta los miembros de la comisión y también el Poder Ejecutivo. La norma dice así: "Fíjase en un 20 por ciento..." —antes era el 33 por ciento— "...el límite de las reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda común que podrán estar integradas con títulos públicos valuados a precio de mercado, durante la gestión del primer directorio del banco designado de acuerdo con lo prescrito por esta ley. Sólo por necesidad de dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o por verse afectados los precios de mercado de los activos mantenidos como prenda común, la participación de títulos públicos mencionada en el párrafo anterior, podrá llegar transitoriamente hasta el límite establecido en el artículo 33. Tal circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación y no podrá extenderse por plazos superiores a los 90 días corridos."

La masa de recursos a la que se refiere el artículo 33 representa el margen que el Banco Central tiene para financiar al Estado y, además, la cantidad imprescindible de recursos que esta entidad requiere para cumplir con sus funciones, una de las cuales está referida al papel que cumple como prestamista de última instancia del sistema financiero, incluida en un artículo que ya ha recibido la aprobación del cuerpo.

Por otra parte, esta masa de recursos es el margen de seguridad que le otorgamos al Banco Central para compensar las modificaciones producidas en las valuaciones de los bienes que integran su reserva, es decir, la prenda común —como se le ha dado en llamar— de la base monetaria.

Este tema debe quedar perfectamente aclarado para que no existan dudas con respecto a la intención del legislador al redactar estos artículos.

Sr. Martínez Raymonda. — ¿Me permite una interrupción señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Balestrini (M. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: quiero hacer una referencia con respecto al segundo de los objetivos que tendría esta política de dotar al Banco Central de los recursos necesarios para su actuación como prestamista en última instancia del sistema financiero.

En este aspecto mantengo un disenso con el miembro informante vinculado con la metodología, cuestión que incluso ratifiqué en conversaciones mantenidas con funcionarios del directorio del Banco Central. Entiendo que en esa actuación de prestamista de última instancia lo que ocurre es inverso a lo que propone esta iniciativa. Cuando el Banco Central suministra dinero por vía de redescuento a las entidades financieras a 7, 15 o no sé cuantos días, llegando finalmente a 30 días, está emitiendo moneda, está creando medios de pago que da al banco prestatario, quien los garantiza con títulos públicos que él cauciona para afianzar este préstamo.

Fíjense que la tenencia de los títulos en cartera del Banco Central no facilita la cosa salvo que se pensara que el Banco Central va a vender ese título en el mercado y de allí sacará el dinero para entregar a los bancos. Pero reitero que la metodología empleada en esta materia que es el redescuento, significa una lisa y llana emisión de moneda, acortada en el tiempo —por supuesto— y garantizada con títulos por el banco prestatario.

Además, es algo que está haciendo en estos días, en que hay escasa liquidez en el sistema financiero y el Banco Central compra millones de dólares y vuelca dinero a la plaza a través de mecanismos de pase con garantía de títulos. Este es el mecanismo por el cual inyecta dinero no bonos, a la plaza.

Se advierte allí una evidente discrepancia en nuestro pensamiento que es importante que quede en claro, porque la interpretación que brinda el miembro informante no se compatibiliza, en mi opinión, con lo que está llevando a la práctica y hará en el futuro el Banco Central.

Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: cuando hice referencia a este tema aludí no a la tenencia de títulos, sino a los márgenes de tenencia de títulos, que son dos conceptos distintos. En la valoración de uno y otro concepto puede estar la discrepancia que ha expresado el señor diputado Martínez Raymonda.

Con relación a este punto, la comisión no tiene más que agregar. De manera que de acuerdo con la mecánica estatuida, corresponde continuar con la consideración de los restantes artículos, porque si el que nos ocupa ha llevado tanto tiempo de debate, la discusión de las demás disposiciones insumirá un lapso demasiado prolongado.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá en votación el artículo 70 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina incluido en el artículo 1º del proyecto de ley aprobado en general.

En consideración el artículo 21.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: de acuerdo con el artículo 21 el Banco Central recibirá los depósitos de la Nación y de las entidades autárquicas y verificará pagos por cuenta de los mismos.

En el segundo párrafo se establece expresamente que no pagará interés por los depósitos, pero tampoco percibirá remuneración por las operaciones que verifique por cuenta de los depositantes.

Sin embargo, en el tercer párrafo se presenta un aspecto que me llama la atención y que me gustaría que la comisión aclarara, porque se dispone que: "El banco podrá disponer el traspaso de los depósitos del gobierno nacional y los de entidades autárquicas a las entidades financieras". Finalmente, se agrega: "Podrá, asimismo, encargar a los bancos la realización de las operaciones bancarias de cualquier índole del gobierno nacional y de las reparticiones o empresas del Estado nacional".

Aunque la respuesta es obvia, quisiera conocer cómo se responde a los siguientes interrogantes: ¿Estarán obligadas estas entidades financieras a pagar intereses por los depósitos?

¿Podrán esas entidades percibir remuneración? Como ambas preguntas merecen a mi entender una respuesta afirmativa, ¿puede hacerse este traspaso sin la conformidad del interesado respectivo, trátase de la Nación o de las reparticiones autárquicas? ¿Qué se entiende por entidades financieras? Formulo este último interrogante porque en el inciso e) del artículo 47 se puede leer que el superintendente puede declarar la extensión de la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas en ella.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: la comisión mantiene el texto del artículo.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: comprendo la posición de la comisión, pero desearía que aunque sea se dé respuesta a los interrogantes que formulé, para que quede fijada la interpretación legislativa de este artículo.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: lo que ocurre es que para la comisión el contenido y sentido de este artículo —que no tiene mayor trascendencia— es muy claro. De todas formas, si el señor diputado tiene alguna observación puntual que realizar, con mucho gusto podremos analizarla. Este es el mecanismo que habíamos acordado, porque de lo contrario tendríamos que hacer nosotros un análisis pormenorizado de cada una de las normas que integran este dictamen.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: lo que yo propongo es que en todo lo relacionado con el traspaso y con las operaciones se tenga en cuenta la conformidad del interesado. Existiendo ella no me preocupa tanto el artículo 47, inciso e).

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: la comisión analizará la propuesta efectuada por el señor diputado por Tucumán.

Sr. Presidente (Brook). — ¿Mientras tanto mantiene el texto original?

Sr. Balestrini (M. A.). — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 22.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: en el segundo párrafo del artículo 22, en lugar de "Comisión Federal de Valores" debe decir "Comisión Nacional de Valores".

Sr. Presidente (Brook). — Se toma nota de la modificación propuesta por la comisión.

En consideración el artículo 23.

Si no se hace uso de la palabra, se pasará a considerar el artículo 24.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: el artículo 24 forma parte de la trilogía constituida por este artículo, el 20 y el 33. El artículo en consideración faculta al banco a pagar los servicios de la deuda pública interna y externa, a medida que vayan venciendo, por cuenta y orden del Tesoro nacional, y establece que el gobierno nacional pondrá a disposición del banco los fondos necesarios para la atención de dichos gastos, pudiendo el banco adelantarlos dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 20. Aquí entra a jugar la interpretación que hizo el miembro informante —que ya suponemos que es la *mens legis*—, aunque me parece bastante difícil que los directores del Banco Central se manejen por la *mens legis*.

Lo que ocurre es lo siguiente. De acuerdo a la interpretación del miembro informante, si el 15 de enero el Banco Central dispone un incremento del 10 por ciento con respecto a la tenencia del año pasado, de manera que cualquier otro incremento habría quedado congelado. Es decir que desde el 15 de enero hasta el 31 de diciembre el Banco Central no podría aumentar un solo peso de títulos en cartera. Pero llegado el vencimiento de una cuota de Bónex o de alguna partida de deuda externa que el Banco Central tiene que liquidar, como éste no puede dejar al gobierno en cesación de pagos, se queda sin cumplir el servicio o viola el artículo 20; esto de acuerdo a la interpretación del señor diputado.

A mi entender, el Banco Central puede pagar tranquilamente, a los tres meses el Tesoro le devuelve lo que pagó y así mantiene el nivel. Esta es la duda que se repite constantemente, por lo que al diputado Balestrini no le debería preocupar tanto que hayamos perdido mucho tiempo en la consideración de los artículos 20, 24 y 33; aquí está el meollo de la norma, porque se le permite al Banco Central volver a abrir el agujero negro en el sistema financiero del país, poniendo en peligro la estabilidad que tanto esfuerzo le está costando a éste.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: reiteramos la posición que mantuvimos al considerar el artículo 20. Más allá de cualquier interpretación de la norma legal, en ningún momento del año y por ninguna circunstancia las autoridades del Banco Central de la República Argentina podrán superar el límite del 10 por ciento fijado en el citado artículo. Esto no lo podrán hacer ni en forma directa, a través de la adquisición de títulos en razón de que el Estado tenga necesidad de recursos financieros, ni en forma indirecta porque el Banco Central le atienda gastos al Estado nacional. Si se le requiere al Banco Central atender gastos del Estado nacional y el banco no tiene márgenes de endeudamiento que lo hagan legalmente permisible, es ilegal la decisión que pueda adoptar el directorio de gastar un peso más que lo que establece la ley. Esto es terminante.

Además, tanto en el análisis de este artículo como en el del resto, hay que tener especialmente en cuenta que a partir de la sanción de esta ley el Banco Central de la República Argentina ya no dependerá del Poder Ejecutivo nacional sino del Congreso de la Nación. En consecuencia, ningún director se va a ver conminado u obligado a realizar gastos por imposición del Poder Ejecutivo, ya que de acuerdo a la autarquía que se plantea no habría más dependencia. Esto lo queremos dejar absolutamente en claro.

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 25.

—No se formulan consideraciones respecto de los artículos 25 a 27.

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 28.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: la comisión propone el siguiente texto para el artículo en consideración: "Con el objeto de regular la cantidad de dinero y vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero, el Banco Central de la República Argentina puede exigir que las entidades financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos y otros pasivos, denominados en moneda local o extranjera. Estos requisitos no podrán ser remunerados.

"No podrá exigir la constitución de otro tipo de depósitos indisponibles o inmovilizaciones a las entidades financieras.

"La integración de los requisitos de reserva no podrá constituirse sino en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el Banco Central de la República Argentina, o en cuenta en di-

visas, según se trate de pasivos de las entidades financieras denominados en moneda local o extranjera respectivamente”.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: cuando se consideró el artículo 26 omití pedir la palabra para efectuar un comentario y una sugerencia.

El artículo 26 se refiere a la obligación del banco de informar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos sobre la situación monetaria, financiera, cambiaria, flujo de fondos, balance de pagos y del producto e ingresos nacionales, formulando en cada caso las consideraciones que estime convenientes. Hemos señalado en más de una oportunidad en este debate la conveniencia de reforzar los controles parlamentarios no sólo en la designación de los directores, los superintendentes, los miembros del Consejo de Vigilancia o eventualmente los sindicatos, sino también la política monetaria. Por esa razón proponemos el siguiente agregado: “Igual obligación tendrá el Banco Central respecto del Honorable Congreso de la Nación cada vez que le sea requerido”.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: con el espíritu de consensuar todas las normas solicito por su intermedio al señor diputado Olivera que nos acerque el texto del agregado que propone a efectos de poder analizarlo. No podemos de ninguna manera consensuar un artículo a distancia porque seguramente se va a correr el riesgo de aplicar una técnica legislativa inadecuada para la sanción de una ley. Si nos envían el texto de la modificación propuesta, con mucho gusto vamos a analizarla y en la medida en que sirva para aclarar los conceptos la comisión la va a tener en cuenta.

Sr. Presidente (Brook). — Queda abierto un paréntesis en el tratamiento del artículo 26 para que el señor diputado Olivera haga llegar a la comisión el texto que está significando.

Volvemos ahora a la consideración del artículo 28. Si no se hace uso de la palabra sobre el texto que propone la comisión, modificando el texto original, se pasará a la consideración del artículo 29.

En consideración el artículo 29. Si no se hace uso de la palabra se pasará a la consideración del artículo 30.

En consideración el artículo 30. Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: según el artículo 30 el banco es el encargado ex-

clusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina y ningún otro órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda.

Pienso que la última expresión, donde se dice: “...podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos...”, deberá quedar reducida a la siguiente: “no podrán emitir otros billetes ni moneda”. La referencia a otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda, parece demasiado amplia teniendo en cuenta que la definición clásica que dan los comerciantes de los papeles de comercio es que son aquellos títulos de crédito que en la práctica del comercio circulan en el lugar y a modo de moneda. Hablar de instrumentos susceptibles de circular como moneda y prohibirlos sería lo mismo que erradicar los papeles de comercio.

En primer lugar, entiendo que quedaría suficientemente claro el espíritu si en lugar de decir que no podrán emitir las otras entidades billetes ni moneda, se dijera “otros billetes o moneda”.

Otra sugerencia es que la comisión tenga en cuenta qué se va a hacer con los famosos bonos provinciales que prácticamente hoy están circulando como billetes.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — El artículo habla de otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda, y en la utilización del término moneda define esos otros instrumentos. A nuestro criterio es correcta la redacción del artículo con el texto sancionado por el Senado.

No obstante, también es correcta —y trataremos de compatibilizar los dos textos— la preocupación del señor diputado López de Zavalía.

Puede haber otros instrumentos susceptibles de funcionar como moneda, por sus características y particularidades, y efectivamente los vamos a tratar en algún momento de este debate.

Los avances de la tecnología y de la ciencia han modificado los instrumentos susceptibles de circular como moneda, a lo largo de la historia económica mundial.

Antiguamente, para poder comprar, la gente debía ir con la famosa bolsita, que contenía la moneda con un valor intrínseco, según se tratara de oro, plata o cualquier otro elemento. Luego apareció el papel billete, que se impuso como la moneda de circulación general.

Nos encontramos frente a avances tecnológicos. Una tarjeta de crédito o cualquier otro

instrumento de esta naturaleza puede llegar a tener las características de moneda, en virtud del impulso generado por las modificaciones profundas que se producen en los usos y costumbres.

En consecuencia, la especificación que hace el artículo se refiere a que cuando se detectaren instrumentos que pueden funcionar como moneda, inmediatamente el Banco Central tendrá que tomar conocimiento de esa situación y adoptar las medidas necesarias a efectos de hacer valer el principio implícito en esta iniciativa y en las leyes generales de la Nación con respecto al monopolio del Estado en cuanto a todo lo que atañe a la circulación de moneda.

Así, la redacción "en otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda" es correcta. Por otra parte, ha sido debidamente analizada y aprobada por el Honorable Senado de la Nación.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 30.

En consideración el artículo 31.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: vamos a proponer una modificación a este artículo, en virtud de la cual quedaría redactado de la manera siguiente: "Los billetes y monedas del banco tendrán curso legal, en los términos de la ley 23.928 en todo el territorio de la República Argentina por el importe expresado en ellos. Los billetes llevarán el facsímil de la firma del presidente del banco, acompañada de la del presidente de la Honorable Cámara de Senadores o de la Honorable Cámara de Diputados, según disponga el directorio del banco para las distintas denominaciones."

Esta propuesta la efectuamos en atención a que de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, es el Honorable Congreso de la Nación el que ordena la impresión de billetes, siendo el Banco Central de la República Argentina —que en breve será autárquico y autónomo, dependiendo sólo del Honorable Congreso de la Nación— el que ejecuta estas disposiciones legales emergentes de la norma constitucional.

En consecuencia, en la conformación del facsímil del billete tiene mucho más significado que la firma sea del presidente de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados, donde radica la facultad constitucional que se delega al Banco Central, y no de un funcionario del órgano ejecutor de esa política. Actualmente ocurre que la firma del presidente del banco es acompañada por la del vicepresidente o gerente general de esa institución. Carece de significa-

ción económica y política el hecho de que las firmas sean las de dos funcionarios —de mayor y menor jerarquía— del órgano de ejecución de la política. Se otorga una significación mucho más trascendente e importante si la firma del presidente del órgano de ejecución es acompañada por la de quienes tienen la representación política en órganos del poder constitucional, como son las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: realmente, me siento conmovido por la reforma que la comisión propone al artículo 31, pues desde hace varios años venimos reclamando el control del Parlamento sobre el Banco Central. Pero no quisiera que nos quedáramos en el simbolismo de que el presidente de esta Cámara o de la de Senadores, según corresponda, firme los billetes, porque podríamos llevarlo, quizás, a cometer el delito de falsificación de moneda. ¿Cuántas veces el Banco Central emitió moneda que era legal en su forma, pero falsa en su contenido?

Por consiguiente, nosotros queremos no sólo que los billetes lleven las firmas antes mencionadas sino que además sean objeto de un control parlamentario. Por ello, oportunamente solicitaremos un agregado que obedece a una vieja aspiración, en el sentido de que se cree una comisión bicameral de control permanente sobre el Banco Central. Se trata de una iniciativa que desde hace tiempo venimos presentando y reproduciendo, pero que, lamentablemente, está durmiendo en las comisiones a las que fue girada. Lo que buscamos es que las firmas de los presidentes de ambas Cámaras tengan el respaldo de esa comisión parlamentaria, que sería la encargada de poner su mirada y sus oídos en los pasillos y en las cuentas del Banco Central. Así, aquellas firmas serían la consecuencia de una moneda que realmente será un bien preciado, preciable, respetado y respetable en todo su funcionamiento.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: lo que acaba de expresar el señor diputado Martínez Raymonda es coincidente con el dictamen alternativo que presentara el bloque de la Unión Cívica Radical, en orden a robustecer el control parlamentario sobre el Banco Central.

En su momento, expusimos acerca de la conveniencia de la creación de una comisión bicameral que se ocupara no sólo de otorgar los acuerdos sino también del seguimiento y control

de las diferentes instancias de la política monetaria. Por esta razón, nosotros coincidimos con lo manifestado por el señor diputado preopinante, y en tal sentido ya expusimos las abundantes razones que existen en torno de la creación de una comisión bicameral que tenga a su cargo el control y el seguimiento tanto de las funciones del Banco Central como de la política monetaria.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.) — Señor presidente: desco hacer referencia a dos cuestiones.

En primer lugar, en el artículo 31 se propone además el siguiente agregado: "Facúltase también al Banco Central de la República Argentina a acuñar moneda con valor numismático o conmemorativo. Dichas monedas no estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el primer párrafo de este artículo". Este agregado no merece mayores aclaraciones; simplemente se trata de una facultad que actualmente no tiene el Banco Central de la República Argentina. La realización de este tipo de acuñación en determinadas circunstancias puede ser realmente importante para conmemorar determinados aniversarios, fechas o acontecimientos.

En segundo término, creo que sí merece tratamiento el tema planteado por los señores diputados Martínez Raymonda y Olivera, pues en torno de esa cuestión hemos realizado un extenso debate.

De las disposiciones del proyecto de ley en consideración se desprende que estamos tratando de que el Banco Central de la República Argentina sea un ente autónomo y autárquico, y que dependa del Congreso de la Nación. Ello constituye el marco legal que determina las relaciones institucionales suficientes para garantizar de manera total, definitiva y absoluta que siempre el Congreso de la Nación va a tener un control que será tan permanente, efectivo y periódico como lo disponga cada una de sus Cámaras o el Poder Legislativo en su conjunto.

No estoy de acuerdo en que se modifique el Reglamento de la Cámara de Diputados o del Senado por medio de una ley. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen una forma peculiar de funcionar. Más aún, se requieren mayorías especiales para establecer modificaciones al mecanismo de funcionamiento de las Cámaras legislativas. Mal haríamos si insistiéramos en modificar nuestro reglamento o el del Senado por simple mayoría.

Entiendo que la formación de una determinada comisión es una cuestión propia de cada una de las Cámaras y no del Congreso en su conjunto. No es apropiado que cada vez que sancionemos

una ley concerniente a algún asunto de mayor o menor importancia introduzcamos formas de funcionamiento del Congreso.

¿A qué nos puede llevar esa práctica? Después de insistir con estos mecanismos podríamos encontrarnos con que para saber cómo funciona la Cámara no tendríamos que leer su reglamento sino cada una de las leyes que van determinando modos de organización del cuerpo.

No es necesaria la conformación de una comisión bicameral para que exista control efectivo, real y permanente del Congreso sobre el Banco Central. La ley y la Constitución le otorgan esta facultad. Así, podremos hacer todo el control que sea necesario adecuándolo a los tiempos, formas y oportunidades que en cada caso indique la iniciativa de los señores diputados y senadores.

Sé que no siempre se ha respetado el principio que vengo expresando. Seguramente, se me dirá que hay una infinidad de antecedentes con respecto a este tema. Pero creo que el peso de mi argumentación es suficientemente importante como para que terminemos con la costumbre de modificar el reglamento por ley estableciendo mecanismos que no sabemos si serán los más oportunos el año que viene, o si deberán ser reemplazados por otras formas de controlar la actuación del Banco Central o de cualquier otro organismo del Estado.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: deseo reafirmar lo que acaba de reconocer el señor miembro informante en el sentido de que la creación de comisiones bicamerales por vía legal se ha convertido en una práctica corriente.

Ello responde a la necesidad de asegurar el control parlamentario de decisiones trascendentes que se adoptan en distintos órdenes de la vida económica y política argentina. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Ley de Reforma del Estado, que crea la comisión encargada de realizar el seguimiento de las privatizaciones; a la ley que establece el marco regulatorio eléctrico, que confiere facultades a una comisión bicameral; a la ley que regula la privatización de Gas del Estado, y a la Ley de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Estos son sólo algunos ejemplos; entre ellos podemos contar algunos proyectos sancionados recientemente mientras otros están en estudio en la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: sin perjuicio de los antecedentes expuestos por

el señor diputado Olivera, repito lo que dije. Nuestra propuesta fue un proyecto de resolución y hasta podría coincidir con el señor diputado Balestrini si tiene una preocupación parlamentaria. Pero tal como dije, lo que iba a sugerir al terminar el debate era tratar este proyecto de resolución que habla de "invitar al Honorable Senado a designar una comisión bicameral", con lo cual salvaríamos algún prejuicio de tipo reglamentario que pudiera quedar, aunque ya la Cámara ha incurrido muchas veces en ese prejuicio.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 31.

En consideración el artículo 32.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: con respecto a este artículo queremos hacer la siguiente observación.

El artículo 32 sancionado por el Honorable Senado dice lo siguiente: "Toda vez que el banco compruebe la violación de su función exclusiva de emitir moneda deberá denunciar el hecho ante el Poder Ejecutivo para que éste tome las medidas que correspondan". Nosotros proponemos la siguiente redacción: "Toda vez que el banco compruebe la violación de su función exclusiva de emitir moneda denunciará el hecho ante la autoridad correspondiente y comunicará al Poder Ejecutivo para que éste tome las medidas correspondientes".

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 32 con la modificación propuesta por la comisión.

En consideración el artículo 33.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: al comenzar el análisis de este tema nosotros propusimos modificar el primer párrafo de este artículo. Actualmente dice lo siguiente: "Hasta una tercera parte de las reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda común, podrán estar integradas con títulos públicos valuados a precio de mercado." Nosotros proponemos la siguiente redacción: "Hasta un 10 por ciento de las reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda común a los fines del cumplimiento del artículo 4º de la ley 23.928, podrán estar integradas con títulos públicos valuados a precio de mercado." El segundo párrafo quedaría redactado igual.

Este artículo pasa a ser parte de la trilogía sobre la que se asienta la posibilidad de defender el valor de nuestra moneda y evitar los manejos emisionistas del pasado.

El señor diputado Balestrini manifestó varias veces en el debate que ésta es la primera vez que se establece un tope, y cuando le hice un comentario dijo: "Pero, ¡vaya el tope que pusieron!" En 1964, este cuerpo consideró la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, particularmente a dos de sus artículos claves: el 27 y el 45. Por uno de ellos se establecía que podía tener títulos en cartera —en ese momento no había títulos en moneda extranjera— y por el otro se fijaba que el Banco Central podía hacer adelantos transitorios al Tesoro nacional, pero durante el debate en ambos se determinó un tope; por ejemplo, se dijo que los adelantos no podían exceder del 30 por ciento del total de los depósitos bancarios y, además, debían ser reintegrados por el Tesoro nacional a los 12 meses.

En ese entonces, era ministro de Economía el doctor Eugenio Blanco, a quien permanentemente rindo homenaje porque fue uno de los hombres más serios y responsables que conoció el país en materia de conducción económica.

Recuerdo que el doctor Blanco se encontraba presente en el recinto durante el transcurso de la consideración de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, y a través de una interrupción me preguntó si no confiaba en la prudencia del señor ministro, por cuanto el proyecto que él propiciaba no fijaba límites. Con todo respeto le contesté que confiaba plenamente en la prudencia del doctor Eugenio Blanco, pero no tenía la seguridad de que permaneciera eternamente en la cartera de Economía. En ese mismo instante el señor ministro aceptó mi observación y retiró su oposición, permitiendo de esa manera que se estableciera un tope.

El tope debe ser claramente fijado en la norma y no debe quedar sujeto ni siquiera a su interpretación.

Si contara con la seguridad de que el señor diputado Balestrini ejercerá la presidencia del Banco Central durante el tiempo que me quede de vida, dejaría de lado mis observaciones, pero nada me garantiza que el señor diputado quiera ejercer ese cargo; por el contrario, estoy seguro de que preferirá continuar ejerciendo la labor de diputado de la Nación, porque es una tarea que desempeña con eficacia y dedicación.

Por otra parte, dije que este tema no debe quedar sujeto a la interpretación de la norma, porque todos sabemos qué sucede cuando se pretende interpretar el espíritu del legislador.

Corresponde considerar en este instante la frase vertida por de la Torre en el debate so-

bre la creación del Banco Central en 1935, cuando dijo: "Si aprobamos el proyecto del Poder Ejecutivo que el señor ministro propicia estaremos poniendo una bomba con la mecha dispuesta para ser encendida por el primer inconsciente que llegue al Banco Central." Y la historia dice que en este tema ha ocurrido algo similar a lo que se relata en un cuento que refiere que una persona que iba de contramano por la avenida del Libertador, al escuchar por la radio que un inconsciente transitaba de contramano por dicha avenida dijo: "hay cientos de inconscientes." Por este motivo se le han sacado trece ceros al peso moneda nacional durante los 57 años de vida del Banco Central. Es ésta la razón que me lleva a decir que es imprescindible establecer un tope en la norma y el control de la comisión.

No sé si mi pensamiento es compartido por el señor ministro de Economía e impulsor de la Ley de Convertibilidad o si esto sólo es propiciado por el Banco Central para desarrollar una operatoria más fluida y con menos ataduras. Por supuesto, no me preocupa que el señor ministro comparta o no mis ideas pero lo que vale rescatar es que compartimos el principio por el cual se sancionó la Ley de Convertibilidad. No venimos desde la vereda de enfrente, ya que votamos afirmativamente la Ley de Convertibilidad, sino que creemos plenamente que esta norma ha sido uno de los instrumentos más eficaces en estos 16 meses de estabilidad. Y como no queremos que esto se termine por el juego eterno de la emisión, sostenemos que es necesario actuar con prudencia en el proyecto en consideración.

Una vez más voy a reiterar algo que he señalado en muchas ocasiones, porque al quedar reflejado en el Diario de Sesiones puede ser que las generaciones futuras no pierdan este concepto que hace al nacimiento mismo de la República. Dijo Mariano Moreno: "Sin embargo, el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal; que sus pasiones tengan un dique más firme que el de su propia voluntad, y que jalando el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos trastornar, se derive la bondad del gobierno, no de las personas que lo ejercen, sino de una Constitución firme que obligue a los sucesores a ser igualmente buenos que los primeros, sin que en ningún caso deje a éstos la libertad de hacerse malos impunemente".

Recuerdo que al votarse el artículo 4º de la Ley de Convertibilidad, el cuerpo se apartó de las prescripciones del reglamento y sancionó un

proyecto de resolución que fijaba que se tenía que establecer en la Ley de Presupuesto, como norma permanente, un tope a la tenencia de títulos nacionales en cartera. Esta resolución fue para respaldar el artículo 4º de esa ley referido a la prenda común de la base monetaria emitida o en circulación.

En la primera Ley de Presupuesto, la correspondiente a 1991, se puso el tope del 10 por ciento, pero no se incorporó a la ley permanente. Cuando llegó el presupuesto del año 1992 nos olvidamos de incorporar el artículo, y entonces, ahora corremos el riesgo de que en un momento de extravío el Banco Central se encuentre con la libertad de poner en marcha la máquina infernal que ha destruido durante décadas a la economía argentina.

Por el bien de todos —no por un capricho— debemos buscar un tope que garantice que la cuestión no se va a ir de madre en materia de emisión monetaria a través del financiamiento al Tesoro por estos mecanismos.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: en oportunidad de referirnos al artículo 20 hemos expresado nuestros reparos con relación a la modalidad con que ha sido redactado el artículo 33.

Comparada esta disposición con lo determinado en la Ley de Convertibilidad y con lo prescrito por la Ley de Presupuesto para el ejercicio 1991, implica una gran flexibilización de la primera de las nombradas en cuanto a la posibilidad de que títulos públicos formen parte de las reservas prenda común de la base monetaria.

Se está pasando de un 10 a un 33 por ciento. Hay quien sostiene que el hecho de que no se haya establecido un límite en el presupuesto de 1992, respecto a la tenencia de títulos en relación con el total de las reservas implica que esta decisión que se está adoptando ahora significa un límite en lugar de una flexibilización.

La conducta del Poder Ejecutivo durante el último tiempo ha sido concordante con lo establecido en la Ley de Presupuesto del año 1991. Tengo en mi poder información sobre la participación que han tenido los Bonex respecto de las reservas desde el comienzo del plan de convertibilidad hasta el 30 de junio de 1992, y en ningún momento este título público ha superado el 11 por ciento y ha ligeramente superado el 10 por ciento en los meses de agosto de 1991 y mayo de 1992.

Desde mi punto de vista, esto implica un reconocimiento del Poder Ejecutivo en cuanto a la permanencia de la vigencia de lo establecido en

la Ley de Presupuesto del año 1991, o por lo menos de la conveniencia de mantener esa prescripción del año 1991.

En los hechos, lo que está ocurriendo con este artículo 33 significa una doble flexibilización de la Ley de Convertibilidad; digo doble porque por un lado es cuantitativa, ya que se está pasando de un 10 a un 33 por ciento, y también porque es cualitativa, por otro, al referirse a títulos públicos, cuando la Ley de Convertibilidad aludía a títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses y otras divisas de similar solvencia valuadas a precio de mercado.

Además, esta flexibilización se realiza sin establecer un destino para las posibilidades que abre este pase del 10 al 33 por ciento. Esto se hubiera evitado si la Ley de Presupuesto hubiese establecido el límite para la proporción de títulos públicos con una definición precisa respecto a qué títulos públicos se refiere. Si la Ley de Presupuesto hubiera contemplado ese límite, al mismo tiempo y casualmente por ser ley de presupuesto, estaríamos frente a la asignación de un destino.

Por esta razón, y porque no es indiferente el destino que se asigne a esta flexibilización, el argumento de que es más barata la tenencia de reservas con esta composición que con la anterior, no es realmente suficiente, porque si lo lleváramos al extremo, sería entonces más conveniente mantener la totalidad de las reservas en títulos públicos nacionales de las características a las que me referí anteriormente.

En consecuencia, insistimos en la conveniencia de que la fijación del límite sea establecida por la Ley de Presupuesto. De más está decir que cuando esta ley se trató en el Congreso, las actitudes limitativas sobre las posibilidades de financiamiento al Tesoro fueron mucho más severas que las que se establecen en el dictamen que ahora consideramos.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M.A.). — Señor presidente: la Comisión insiste en el texto propuesto para los artículos 20, 33 y cláusula especial; cláusula que agregamos con el ánimo de compatibilizar las distintas posiciones y que, por otra parte, hicimos conocer por adelantado a los señores diputados.

No obstante, deseo destacar que es muy importante lo que trasciende a la opinión pública sobre el particular, como consecuencia de la elevada sensibilidad que la sociedad tiene respecto del uso de estos instrumentos. Por eso,

hemos insistido en toda la argumentación, para que no haya malos entendidos y para que no exista confusión en los señores diputados o en la sociedad en su conjunto.

Pero voy a ser muy claro: la norma que estamos sancionando es total y absolutamente limitativa en cuanto al uso de este instrumento de financiamiento por parte del Estado. Como ya he sostenido, por medio del artículo 18 se podrían emitir 12.000 millones de dólares, por el 29, 10.000 millones de dólares, y por el 51, 7.000 millones de dólares. Además, existen otras normas complementarias que facilitan la emisión.

En este sentido, la norma que estamos por sancionar termina con las actualmente vigentes, que se utilizaron en el pasado y que se constituyeron en una de las causas de la debacle argentina. Por eso, estas normas no se pueden interpretar en forma aislada. El artículo 20 establece un límite del 10 por ciento; se pueden hacer los cálculos matemáticos respecto de ese límite. El artículo 33 también determina otro límite, y los cálculos matemáticos también se pueden hacer. Además, hay un límite que se autoimpone este gobierno a través de la cláusula transitoria, que es el 20 por ciento.

Para terminar, señor presidente, quisiera referirme al planteo realizado por el miembro informante del dictamen de minoría de la Unión Cívica Radical, señor diputado Olivera. No hay diferencias en las monedas en las que están expresados los títulos porque en nuestro país está en circulación el peso convertible. Los pesos son siempre convertibles. No se trata de querer colocar pesos o bonos expresados en una moneda con una significación distinta a la que expresa la Ley de Convertibilidad; aquí estamos hablando de pesos convertibles, los que en consecuencia dan la misma jerarquía a los bonos.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: con respecto a la trilogía de artículos que toma el señor diputado por Córdoba —que es distinta a la mía pues él tiene en cuenta el artículo complementario que habría que agregar al final—, me planteo lo siguiente. Si el actual gobierno entiende que el 20 por ciento durante su gestión es un tope aceptable —aunque para mí lo sería un 10 por ciento—, ¿por qué no dejar este tope para siempre? ¿Por qué dejar piedra libre para los que vendrán después?

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M.A.). — Señor presidente: quiero responder a la preocupación del señor diputado por la Capital.

Como funcionan los límites del artículo 20, el desarrollo del endeudamiento hasta llegar al 33 por ciento se va a producir en un tiempo muy superior a los seis años. Se fija ese límite porque ésa es la estructura racional y lógica de cualquier banco central localizado en todo país en donde no haya la hipersensibilidad que todavía existe en el nuestro con relación a la utilización de este instrumento. Estamos hablando de un tema estructural; el 33 por ciento está referido a una cuestión estructural, y los límites establecidos en la cláusula transitoria y en el artículo 20 demuestran que se ha tenido en consideración la especial y particular sensibilidad que tiene aún la sociedad argentina con respecto a la utilización de estos mecanismos. Además, para aventar cualquier duda respecto de su utilización establecemos esta cláusula transitoria exclusivamente para el período de nuestro gobierno.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: con respecto a lo expresado recientemente por el miembro informante del dictamen de mayoría, en el sentido de que no es necesario hacer ningún agregado a la expresión "títulos públicos" dado que podrían emitirse en pesos convertibles, quisiera hacer la siguiente reflexión. Aquí estamos hablando de las reservas, que son la prenda común de la base monetaria, y resultaría una situación muy singular —llevando el argumento al extremo— que las reservas estuvieran constituidas exclusivamente por títulos públicos emitidos por el gobierno nacional, inclusive expresados en pesos.

La convertibilidad tiene que ver con una determinada relación entre base monetaria y reservas, y si dicha relación se altera sustancialmente —por supuesto, manteniéndose estables las expectativas, porque si no la situación cambiaría por otras razones— la convertibilidad de los pesos se modificaría.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 33.

En consideración el artículo 34.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: en este artículo 34 simplemente proponemos una modificación semántica, quedando redactada la segunda parte del siguiente modo: "...siguiendo los mismos principios generales, que sean establecidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para el conjunto de entidades."

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: al considerar-se el artículo 33 omití hacer una reflexión, y no sé si todavía estoy en condiciones de efectuarla.

Sr. Presidente (Brook). — La Presidencia entiende que el carácter de este debate lo permite, señor diputado.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: hemos debatido bastante sobre la cuestión del porcentaje a que se refiere el artículo 33 —se habló de un 10, 20 y 33 por ciento— y sobre las disposiciones contenidas en el presupuesto correspondiente a 1991, en este proyecto y en una propuesta de la comisión. Con respecto a este tema quisiera advertir lo siguiente. Si no existe la firme predisposición y voluntad de este gobierno o de los que vengan de mantener una disciplina fiscal que termine con los procesos inflacionarios en la República Argentina, de nada servirá que en estas normas fijemos límites a la posibilidad de que las reservas estén constituidas con títulos públicos.

Los argentinos tenemos una larga experiencia de procesos inflacionarios e hiperinflacionarios. Por eso, considero que un marco de sana convivencia democrática y un análisis concienzudo y serio de este tema nos deben llevar a tener en cuenta que pasar de una política extremadamente flexible como la que hemos tenido a otra tan dura como la que se está planteando requiere de algún tipo de elasticidad.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 34 con las modificaciones propuestas por el miembro informante de la comisión.

En consideración el artículo 35.

Si no se hace uso de la palabra, se pasa a considerar el artículo 36.

—No se formulan consideraciones respecto de los artículos 36 a 38 inclusive.

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 39.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: con respecto al artículo en consideración y a los otros que se refieren al sistema de fiscalización del Banco Central insistimos con nuestra propuesta de creación de un consejo de vigilancia.

Entendemos que suficientemente bien integrado —tal como figura en nuestro dictamen— el consejo de vigilancia puede ser un instrumento más apto para ejecutar estas funciones que una sindicatura y una auditoría externa.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 39.

En consideración el artículo 40.

—No se formulan consideraciones respecto de los artículos 40 y 41.

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 42.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: proponemos que el artículo 42 quede redactado del siguiente modo: "Incumbe al banco compilar y publicar regularmente las estadísticas monetarias y financieras. Podrá también hacer lo propio en relación a balances de pagos y las cuentas nacionales de la República Argentina.

"El banco podrá realizar, asimismo investigaciones técnicas sobre temas de interés para la política monetaria, cambiaria y financiera". Esta modificación obedece a nuestra intención de precisar más la terminología.

Sr. Loutaif. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Brook). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: aparentemente, la redacción original del artículo 42 obligaba al banco, y según lo que plantea el señor miembro informante, se trataría de una facultad y no de una obligación. Quisiera tener mayores precisiones sobre el tema.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: precisamente éste es el sentido de la modificación que proponemos.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 42.

En consideración el artículo 43.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: sugiero que a continuación de lo establecido en el artículo 43 del dictamen aprobado en general se agregue un párrafo referido a la obligación por parte de la Superintendencia de tener a disposición del directorio del Banco Central y de las autoridades competentes información sobre la calificación económico-financiera de las entidades supervisadas, y al mismo tiempo los criterios utilizados para esa calificación.

Nosotros entendemos que es fundamental —y eso ha sido compartido en este recinto— fortalecer las atribuciones de la Superintendencia.

Consideramos que también es conveniente que esa Superintendencia esté sometida a su vez a un control de gestión. La mejor manera

de ejercer ese control de gestión es que la Superintendencia exponga constantemente su opinión sobre las entidades financieras supervisadas. Debe ser una opinión fundada, es decir la calificación económico-financiera de las entidades. Será la manera de poder atribuir responsabilidades en caso de que el comportamiento posterior de esas entidades financieras se separe de la previsión y calificación realizada por la Superintendencia.

Concretamente se propone agregar a ese artículo 43 el siguiente párrafo: "En todo momento el superintendente deberá tener a disposición del directorio y de las autoridades competentes información sobre la calificación de las entidades financieras y criterios utilizados para dicha calificación".

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: estamos de acuerdo con el concepto y el contenido expresado por el señor diputado Olivera, pero por razones de técnica legislativa quisiéramos que nos haga llegar la redacción a los efectos de hacer los ajustes necesarios e incluir esa propuesta.

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 44.

Si no se hace uso de la palabra, se pasa a considerar el artículo 45.

En consideración el artículo 45.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: la comisión propone la siguiente redacción para el artículo 45: "El superintendente y el vicesuperintendente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del presidente del banco de entre los miembros del directorio. La duración de sus funciones será de tres años o hasta la conclusión de su mandato como director si este último fuera menor".

Esta es una propuesta que deviene de modificaciones que hemos efectuado en el tratamiento de artículos anteriores. Por lo que se trata de una compatibilización.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 45.

En consideración el artículo 46.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: en concordancia con los artículos ya aprobados en sesiones anteriores, corresponde suprimir los incisos a), b) y c) del artículo 46, que se refieren a facultades de la Superintendencia que se han transferido al directorio. Al mismo tiempo, pro-

pongo la incorporación de un inciso, que pasaría a ser el f).

Dada la propuesta de que la Superintendencia disponga sobre la calificación de entidades financieras, el nuevo inciso que proponemos impone a dicha Superintendencia la obligación de crear y administrar una central de riesgos y datos. Esta sería la única posibilidad que tendría la Superintendencia para cumplir eficazmente con su función de calificar entidades.

Concretamente, propongo la supresión de los tres primeros incisos del artículo 46, dado que la responsabilidad que imponen ha sido transferida al directorio, y la incorporación de un inciso f), que expresaría: "Crear y administrar una central de riesgos y datos".

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: estamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta, pero quisiéramos contar con la norma escrita.

A su vez, la comisión propone una modificación al inciso h) de este artículo 46, que quedaría redactado de la siguiente manera: "Establecer los requisitos que deben cumplir los auditores de las entidades financieras y cambiarias". Esto también se vincula con lo mencionado por el señor diputado preopinante.

Entonces, esperaremos la redacción que nos propone el señor diputado Olivera. Hay que reordenar este artículo en atención a que las facultades de los incisos a), b) y c) se transfirieron de la Superintendencia al directorio del banco. Respecto de la propuesta de agregar un inciso f), adelanto que la comisión no acepta en razón de que esa función ya se halla prevista en la última parte del artículo 43.

Sr. Presidente (Brook). — La Presidencia sugiere que la comisión remita a Secretaría el texto definitivo del artículo 46, luego de que sea acordado con el señor diputado Olivera.

Sr. Balestrini (M. A.). — Así se hará, señor presidente.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 46.

En consideración el artículo 47.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalia. — Señor presidente: en atención a lo que acaba de expresarse sobre el artículo 46, y teniendo en cuenta que la autorización de la apertura de nuevas entidades financieras pasará a ser una facultad del directorio, también correspondería tomar alguna decisión con relación al inciso e) del artículo 47 en virtud del cual es facultad propia del superinten-

dente declarar la extensión de la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas en ella.

Si autorizar nuevas entidades financieras es facultad del directorio, sería incompatible que el superintendente pudiera extender la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a cualquier persona. Frente a la hipótesis de que la comisión decidiera no escuchar esta inquietud, pienso que el mismo contexto es inconstitucional porque crea una figura abierta de entidades financieras. Entiendo que habría que establecer algún límite. Incluso, si se trata de una facultad del directorio, esto no puede depender del volumen de las operaciones; por lo menos, deberíamos decir "volumen, naturaleza y habitualidad" para que tenga algo que ver con las entidades financieras.

Para no fatigar al señor miembro informante, quien se molestó a raíz de una de mis intervenciones anteriores no obstante que él ha hecho uso y abuso de su facultad de exponer, como si no existiera una medida común para los legisladores y estuviéramos aquí como los ingleses, que durante años se resistieron al sistema métrico decimal y establecieron como medida el pie —midiendo con el pie inglés cuando convenía, y el francés cuando no—, me referiré al artículo 51, que sinceramente me sorprende.

El citado artículo dice así: "La Superintendencia podrá requerir de las entidades financieras, casas y agencias, oficinas y corredores de cambio, exportadores e importadores u otras personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros y documentos...", y culmina: "...y disponer el secuestro de los mismos y todo otro elemento relacionado con dichas operaciones". Es una facultad excesiva el secuestro de los libros de comercio de personas físicas o jurídicas que no sean entidades financieras, dado que a ellas no se ha extendido la aplicación de la ley pertinente.

Sugiero que la comisión tome con simpatía esta observación que formula un modesto diputado, y que se determine la intervención de los jueces en estos casos.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: deseo expresar nuestra coincidencia con respecto a la sugerencia formulada por el señor diputado López de Zavalia. En tal sentido, proponemos que el inciso e) del artículo 47 quede redactado de la siguiente forma: "Proponer al directorio del Banco Central la extensión en la aplicación...". Esta nueva redacción sería concordante con las disposiciones que han sido transferidas al directo-

rio, tal como lo acaba de expresar el señor diputado por Tucumán.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: en primer lugar, en nombre de la comisión solicito disculpas al señor diputado López de Zavalia si en algún momento hemos actuado limitándole la posibilidad de opinar en torno del tratamiento de este proyecto de ley. Esa actitud ha estado absolutamente fuera de nuestra voluntad, pues respetamos profundamente al señor diputado por Tucumán, dado que conocemos su capacidad y la forma en que permanentemente trabaja mediante el aporte de importantes ideas.

El inciso e) del artículo 47 dice lo siguiente: "Declarar la extensión en la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas en ella, cuando así lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria, cambiaria o crediticia, previa consulta con el presidente del banco". Fijense que nos estamos refiriendo a un conjunto de manifestaciones, tales como operaciones o actividades permanentes o temporales, que son muy difíciles de calificar mediante una disposición que pretende ser permanente; ello, porque a lo largo del tiempo surgen, desaparecen y toman mayor o menor importancia este tipo de actividades. En consecuencia, es muy difícil, o prácticamente imposible, hacer casuística en la prevención de estas cosas.

Lo que sí debemos tener en cuenta es que ciertas operaciones económicas comienzan a tener temporal o permanentemente los mismos efectos monetarios que las operaciones tradicionales, a pesar de no estar tipificadas en la Ley de Entidades Financieras. Por lo tanto, es necesario que exista un dispositivo que encuadre tales manifestaciones económicas en esta ley y faculte a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a controlar sus efectos crediticios y monetarios. Para organizar de manera más eficiente el control del sistema financiero que debe ejercer el Banco Central, esta comisión considera que debe preverse una disposición global.

En segundo lugar, las decisiones concernientes a este control tienen que tomarse en conjunto con el presidente del Banco Central.

Finalmente, hay que considerar que el control de estas actividades económicas podrá exigir a veces medidas rápidas, urgentes e inme-

diatas. Las razones expuestas justifican, a nuestro juicio, el alcance del inciso e) del artículo 47.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Luis Alberto Martínez.

Sr. Balestrini (M. A.). — La comisión quiere proponer una modificación de fundamental importancia en este artículo, cual es el agregado de un inciso h) que establezca lo siguiente: "Aplicar las disposiciones legales que sobre el funcionamiento de las denominadas tarjetas de crédito, tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares dicte el Honorable Congreso de la Nación y las reglamentaciones que en uso de sus facultades dicte el Banco Central de la República Argentina".

Analizando las características de las tarjetas de crédito, tarjetas de compra o, más correctamente, dinero electrónico, es muy claro que entrarían dentro de las especificaciones generales del inciso e). Quiero explicar brevemente porque la comisión entiende que estos fenómenos de los tiempos modernos deben quedar incluidos expresamente dentro de la órbita del Banco Central.

Este fenómeno va adquiriendo cada vez mayor importancia en el mundo moderno. Una sola tarjeta de crédito de importancia mundial tiene más de 180 millones de usuarios y factura más de 600 millones de dólares por día.

Este fenómeno del denominado "dinero plástico", "dinero electrónico" o tarjetas de crédito hace que lleguemos a la conclusión, en un concepto general del dinero, de que si tomamos en consideración la rápida evolución que han sufrido fundamentalmente en los países con estabilidad, ello se convertirá, como lo dicen muchos tratadistas, en el dinero del futuro.

Muchos países ya han adoptado la actitud de que estas manifestaciones económicas estén controladas, armonizadas y organizadas bajo la supervisión de los bancos centrales de los países respectivos. Nuestro país se incorpora a esas naciones del mundo con la normativa que estamos dictando en esta oportunidad.

Ahora bien, ¿cómo funciona este mecanismo en nuestro país? En la República Argentina estuvo alejado o demorado el desarrollo de estos sistemas como consecuencia de los procesos inflacionarios, que son los que conspiran en contra de aquél, pero inmediatamente que logramos la estabilidad se produjo un extraordinario crecimiento del uso de este "dinero electrónico" por parte de los argentinos.

Daré algunas cifras referidas a este hecho económico y haré algunas consideraciones sobre sus efectos macroeconómicos y también respecto de los que inciden en la organización del comercio en nuestro país.

Las estadísticas que hemos logrado compilar —porque no existen informaciones oficiales ni datos fidedignos— nos indican que en la Argentina hay en este momento entre 4 millones y 4 millones y medio de usuarios de tarjetas de crédito y que el uso promedio de dichas tarjetas oscila entre 150 y 200 dólares por mes, lo que implicaría que esta moneda mueve mensualmente de 750 a 1.000 millones de dólares.

No existe ninguna disposición legal que establezca qué relaciones técnicas deben tener las entidades emisoras de tales tarjetas ni cuál es la solvencia patrimonial requerida a las organizaciones empresarias que emitan por su cuenta y riesgo dichas tarjetas. Por ese motivo, precisamente, hemos recibido opiniones de casi todos los centros comerciales del país en el sentido de que debe establecerse algún mecanismo a efectos de que se normalice el funcionamiento de este verdadero poder monetario que se ha instalado en la Argentina. Para que no haya equívocos al respecto quiero señalar que su existencia es indetenible, en especial por el volumen negocial que implican y el cúmulo de situaciones que ello genera en el ámbito de funcionamiento de la economía del país.

En nombre de la comisión quiero dejar en claro que de ninguna manera pretendemos trabar o interrumpir el desarrollo de este instrumento que tanta importancia está tomando en la actividad comercial. Pero debemos señalar aquí que quienes emiten y administran tarjetas de crédito tienen poder en la medida en que constituyen moneda, y esto ocurre siempre y cuando exista una importante cantidad de ciudadanos que lleven en su bolsillo una tarjeta de crédito.

Advertimos una deliberada política de otorgamiento de tarjetas de crédito a cualquier ciudadano que la solicite, sin tenerse en cuenta su solvencia patrimonial. Existe una actitud tendiente a construir un poder entregando este instrumento a todo quien lo pida, pero esta política de liberalización produce altísimos costos —por los quebrantos y la administración que ello implica—, que se traducen en los porcentajes de retención que le aplican al punto más débil de esta cadena los comerciantes, quienes se ven compelidos a aceptar cualquier tipo de comisión. Este es el motivo que los ha llevado hace pocos días a no aceptar hacer ventas con tarjetas de crédito. Cuando advertimos que en el desarrollo de las relaciones entre los hombres

ocurren injusticias es nuestra facultad y obligación tratar de resolver los conflictos que se suscitan.

En algunos casos se llega a comisiones de hasta un 10 por ciento; pero lo grave de esta cuestión es que por igual servicio existen diversas tarifas. Para igual servicio sí se registra el mismo costo, pero no ocurre lo mismo con las tarifas, porque no a todos les pueden cobrar el 10 por ciento; por ello, a algunos comerciantes se les cobra el 8, el 7, el 5, el 4 o el 3 por ciento. El hecho de que con respecto a este tema no rija el principio de que a igual servicio, igual tarifa, se debe a que se está aplicando el poder de una moneda a determinados ciudadanos que, bajo otras condiciones, jamás aceptarían.

Por otra parte, cabe destacar que los porcentajes a los que he hecho alusión son mucho más altos que los internacionales. ¿Esto ocurre porque los argentinos no pagamos las deudas? No; lo que pasa es que para construir este poder con el que se logra una rentabilidad muy importante, se actúa con total y absoluta liberalización, y quien debe pagar los costos —que es el más débil de esta cadena— no pueda dejar de aceptar tarjetas de crédito porque es el instrumento que llevan en el bolsillo los argentinos que más gastos pueden hacer.

También con respecto a este tema hay que formular algunas otras consideraciones particulares. El 80 por ciento de los tenedores de tarjetas corresponde al 25 por ciento de la población de más altos recursos en la República Argentina. En consecuencia, sólo el 20 por ciento de los tenedores de tarjetas se corresponden con el 75 por ciento restante de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora el fenómeno de la tarjeta de crédito está en poder de los más ricos y que no la utilizan los más pobres. Veamos qué efectos produce su utilización.

Existen normas a las cuales están obligados los comerciantes. Según el mecanismo al que me estoy refiriendo al comerciante se le hace firmar un contrato que determina expresamente que no pueden distinguir con respecto al precio de contado, o sea, que aquél no puede distinguir el precio entre quien compra con el peso convertible —con el peso al que nos hemos estado refiriendo en todo momento— y quien lo hace con la tarjeta electrónica, con la tarjeta de crédito o de compra. Esto significa que en la boca de salida de un supermercado, donde concurren los que tienen tarjeta y los que no la tienen, existe un precio al que se agrega un costo, que a veces llega al 10 por ciento, por obra de la tarjeta; así, aquel costo pasa a formar parte

del precio. Pero este precio, ponderado por la mezcla de moneda con que se compra, lo pagan también quienes no emplean tarjetas de crédito. En consecuencia, hay un efecto inflacionario que resulta, en primer lugar, de incluir un costo que no forma parte del precio del producto, dentro de este último, pues el costo de la tarjeta integra ese precio. En segundo término, a ese costo adicional se lo hacemos pagar al que usa y al que no usa la tarjeta, circunstancia que por la composición estadística que he expresado la torna total y absolutamente regresiva.

Para concluir quiero dejar fijada la posición de la comisión con relación a este tema. Hace cuatro años que se vienen presentando proyectos para debatir esta cuestión, pero, por esas cosas que no pretendo calificar, nunca han llegado a considerarse en el recinto: nunca la Cámara pudo tratar el famoso tema de las tarjetas de crédito, nunca pudo analizar si es necesario establecer alguna disposición o alguna reglamentación o si es conveniente dejar que las cosas sigan como están.

En esta oportunidad lo que hacemos es otorgar facultades al Banco Central con respecto a este fenómeno que representan las tarjetas de crédito, el dinero electrónico, porque consideramos que esa es la institución que debe aplicar las disposiciones que el Congreso dicte pues en un concepto genérico esto es dinero y éste es algo propio y facultativo del Banco Central de la República Argentina.

Hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Pretendemos dar a la norma el marco de universalidad necesario, porque mal haríamos en dictar una carta orgánica para el Banco Central que no contemplara lo que sabemos que en el futuro tendrá que contemplar. Lo que nosotros haremos es particularizar e incluir expresamente este tipo de manifestaciones económicas.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: respecto de lo expresado por el señor diputado Balestrini sobre las tarjetas de crédito, por cierto compartimos la descripción que ha hecho sobre la importancia de esa actividad y, al mismo tiempo, algunas de las descripciones que formulara sobre la modalidad operativa. Coincidimos también en la necesidad de que exista un marco legal que regule esta actividad, a tal punto que existe en la Comisión de Comercio de esta Honorable Cámara un proyecto de ley — con pedido de pronto despacho — para regular el conjunto de actividades

habitualmente vinculadas a las tarjetas de crédito o dinero plástico.

En cuanto a la sugerencia del señor diputado Balestrini, de incorporar entre las facultades del superintendente el control de las tarjetas de crédito, me permito formular la siguiente reflexión desde el punto de vista de una buena técnica legislativa: si así procediéramos, estaríamos delegando en el directorio del Banco Central la fijación de las políticas generales para controlar la actividad de estas empresas. Y digo esto porque en el artículo 46 se dice que "Al superintendente le corresponde, en el marco de las políticas generales fijadas por el directorio del banco y poniendo en conocimiento del mismo las decisiones que se adopten, las siguientes funciones: ..."

Sr. Manny. — ¿Me permite, señor diputado Balestrini...?

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: entiendo que la Presidencia está en libertad de dar la palabra a quienes quieran opinar sobre este tema, porque ésa es la mecánica que hemos establecido y porque no está en mi ánimo suplantarla en desmedro de algunas observaciones que se deseen formular.

Sr. Presidente (Martínez). — El señor diputado Manny solicitó que se lo anote para hacer uso de la palabra y el señor diputado Olivera le pidió a usted una respuesta a una proposición concreta. Por eso la Presidencia concedió el uso de la palabra al señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: si el señor diputado Manny va a opinar sobre este tema, quisiera primero escucharlo para luego responderle en forma conjunta a él y al señor diputado Olivera.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — Señor presidente: solicité la palabra para marcar algún matiz diferencial, porque en el fondo deberíamos mirar este tema de las tarjetas de crédito bajo la óptica de la libertad de contratación. Nadie obliga a un comercio o a un ciudadano a utilizar este mecanismo; no obstante, el sistema crece porque conviene a unos y otros.

Técnicamente hablando, hay que reconocer que por esta vía hay una cierta creación de moneda, porque quien va a comprar un pantalón o un televisor utilizando la tarjeta de crédito está recibiendo un bien sin entregar nada a cambio en ese instante; simplemente existe un compromiso de pago.

En realidad, esa creación monetaria no se produce únicamente por la utilización de las tarjetas sino que de alguna manera existe a través del mecanismo del crédito. Por ello es correcto que los bancos centrales de todo el mundo manejen tanto el tema de la creación física de la moneda como el de todos los mecanismos crediticios.

De modo que éste sería un mecanismo crediticio más, y se está difundiendo porque un comerciante cualquiera le puede vender un televisor a alguien aunque no tenga tarjeta, es decir, otorgándole un crédito a sola firma o como fuere. Pero el mecanismo de la tarjeta de crédito lleva implícita una garantía, ya que aquel que la emite se hace responsable del pago.

Es decir que son varios los factores que indican que en el mundo este sistema se está difundiendo cada vez más. Nosotros, como liberales, lo vemos bajo dos puntos de vista: el de la creación de la moneda, que no es implícita sino explícita, y el de la libertad de contratación, que a nuestro entender debería estar lo menos regulada posible.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Señor presidente: sinceramente no pensaba hacer uso de la palabra porque la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no es de mi especialidad, pero como aquí se abordó el tema de las tarjetas de crédito quiero dejar constancia de que el año pasado en la Comisión de Comercio —de la que ahora soy vicepresidente— se llevó a cabo una serie de charlas de las que participaron comerciantes, usuarios de tarjetas de crédito y las cámaras que agrupan a las emisoras de dichos instrumentos. Allí se plantearon los pro y los contra de la utilización de la tarjeta de crédito; algunos hablaban de los abusos que cometían las cámaras con la demora de los pagos, etcétera, y otros ponían el acento en los beneficios que recibían los comerciantes por haberse librado de investigar al comprador.

Luego de esa serie de reuniones se llegó a la conclusión de que era necesario establecer el marco regulatorio del tema de las tarjetas de crédito en nuestro país. Quiero aclarar que junto con otros diputados radicales hemos presentado oportunamente un proyecto de ley referido al empleo de las tarjetas de crédito, respecto del cual la Cámara votó recientemente un pedido de pronto despacho. Cabe aclarar que la Comisión de Comercio ha constituido una subcomisión al efecto, y espero que en poco tiempo

la Comisión de Legislación General nos convoque para tratar el tema.

Como nobleza obliga, quiero mencionar que el señor diputado Lamberto también presentó oportunamente un proyecto de ley relacionado con el tema de las tarjetas de crédito.

Al elaborar nuestro proyecto, que no se enfrenta para nada con la libertad de mercado y demás, hemos tenido en cuenta antecedentes de los Estados Unidos, donde existe un marco regulatorio para las tarjetas de crédito. Nuestro interés fundamental es proteger al comerciante y, sobre todo, al usuario. A tal efecto, tratamos de establecer normas claras para que no se cometan excesos en los descuentos que se le efectúan a los comerciantes ni en la diferencia de precio entre la compra al contado y la que se hace con tarjeta de crédito.

En este sentido, hay que tener en cuenta los intereses punitivos, que a veces son exagerados, la antelación mínima con que los usuarios deben recibir las liquidaciones y las demás condiciones contractuales relacionadas con el marco regulatorio que las partes consensuaron en su oportunidad respecto de una tarjeta de crédito.

A nuestro juicio es fundamental que esta Honorable Cámara considere y sancione rápidamente un proyecto de ley sobre este tema —no me refiero sólo a la iniciativa de mi autoría, porque también mencioné otra del señor diputado Lamberto— pues es necesario regular el uso de la tarjeta de crédito en estos momentos de estabilidad a efectos de que no se reiteren los desmanes que se han cometido. El marco regulatorio prácticamente está consensuado por las partes, y por ello insto nuevamente a los señores diputados a que nos pongamos a trabajar en esta cuestión de inmediato para que la legislación argentina en esta materia se modernice y esté al servicio de los usuarios y los comerciantes, dando también título ejecutivo a las liquidaciones por medio de características especiales, para que puedan ser ejecutadas en su momento.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: al margen del proyecto de ley en consideración entiendo que es propicio tomar una decisión respecto del tema de las tarjetas de crédito. Dos años atrás presenté un proyecto sobre esta cuestión que nunca tuvo dictamen de las comisiones a las que fue girado.

Se trata de uno de los problemas sociales más significativos de nuestra época por el cual en

determinado momento el consumidor termina siendo un preso del sistema y carece de defensa e información. Por ese motivo, creo que se debería acordar preferencia para tratar, con o sin despacho de comisión, los proyectos presentados sobre esta materia. De este modo se daría una solución definitiva al sistema de tarjetas de crédito en la República Argentina de hoy, en la que no existe ninguna disposición legal que regule este moderno instrumento que tiene tanto efecto sobre la sociedad, la oferta monetaria, las transacciones comerciales, etcétera, y no puede quedar librado absolutamente a la voluntad de los emisores. Este tema tiene la misma legislación que la libreta del almacenero, y evidentemente la diferencia económica es grande.

Por lo expuesto, estimo que en esta temática se debería sortear el paso de los proyectos por las comisiones y considerarse directamente en el recinto de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. — Señor presidente: me opongo a la inclusión que sugiere el señor miembro informante al artículo 47, según la cual se suma a las facultades del superintendente de bancos la del ejercicio del poder de policía sobre las tarjetas de crédito.

Entiendo que al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias le vamos a otorgar tantas facultades y funciones que en definitiva va a terminar no cumpliendo absolutamente ninguno de los objetivos que fija esta norma.

En el curso de este debate se ha confundido la tarjeta de crédito con la moneda. Aunque coloquialmente se la denomine "dinero plástico", en modo alguno la tarjeta de crédito es dinero, y por supuesto la cantidad de dinero no se expande por un mayor o menor uso de las tarjetas de crédito. En definitiva, cuando se realiza una compra mediante el uso de la tarjeta de crédito, se trata de una operación de crédito que habrá de ser saldada, cancelada, con crédito que posteriormente obtenga el usuario de la tarjeta al momento del vencimiento de su obligación con el sujeto emisor o en efectivo. No existe una expansión del crédito propiamente dicha.

Si se considerara que se expande el crédito mediante esta operatoria, ocurriría que toda vez que se emplee pagaré o que simplemente se compre al fiado y sin documento escrito, de acuerdo a lo que autoriza el Código de Comercio, estaríamos hablando de un proceso de expansión del crédito, y esto no es así.

Obviamente no confundo la venta al fiado y sin documento escrito con la venta mediante el uso de tarjeta de crédito, pero lo que quiero poner de manifiesto es que una venta a crédito no es una operación monetaria de las que se pretende dejar reguladas o supervisadas por esta ley de reorganización del Banco Central de la República Argentina, y por ende tampoco las entidades emisoras de tarjetas de crédito ni los usuarios de dichas tarjetas debieran caer dentro de los objetivos de control que se le otorgarán al superintendente.

En cuanto a las apreciaciones del señor diputado Lamberto en el sentido de que las operaciones con tarjetas de crédito son de una magnitud tal que deberían quedar de alguna manera reguladas por el derecho positivo argentino, recuerdo que hay otra serie de contratos que no están contemplados por el derecho positivo argentino y que tienen una importancia enorme, como el *leasing* o el *franchising*. Estos contratos no han sido tipificados por el derecho positivo argentino y justamente han surgido como creación espontánea del mercado, que no encuentra en lo tipificado las formas que les permitan resolver una situación o un hecho particular y lo regula contractualmente y en forma voluntaria, como lo anticipara el señor diputado Manny.

Es la espontaneidad del mercado la que va resolviendo estos fenómenos que el derecho probablemente contemple con posterioridad.

En la actualidad hay más de tres millones de usuarios de tarjetas de crédito, según lo que pudimos saber durante la consideración, el año pasado en este recinto, de los proyectos destinados a regular el empleo, la emisión y las relaciones que se dan con motivo del uso de las tarjetas de crédito. Y advertimos que se presenta una ínfima cantidad de conflictos en el uso de las tarjetas de crédito; y si bien las que se presentan en algunos casos son tan importantes como los que fueron ya indicados, no justifican que a través de una legislación se avance en una relación contractual libre y que está dentro de los contratos lícitos que puedan realizar las partes, según lo establecido por el Código Civil.

Por eso pienso que es absolutamente innecesario avanzar con una legislación específica que tipifique o defina el contrato de las tarjetas de crédito, toda vez que si se hace de ese modo, advertiremos los inconvenientes de esa legislación, con la necesidad de actualizarla permanentemente según los cambios que se vayan dando en el mercado y donde la práctica va a dejar obsoletas

las mejores disposiciones que estén contenidas en una ley.

Creo que el solo hecho de que haya un instituto no tipificado en nuestro derecho comercial no hace necesario que deba serlo mediante una ley. Pudo haber surgido espontáneamente por la libertad de las partes de establecer contratos entre sí y dejemos que por el momento funcione tal como está.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Aguado. — Señor presidente: desearé expresar mi oposición a que el tema de las tarjetas de crédito pueda ser tratado en este recinto sin despacho de comisión. Creo que un tema tan importante no puede ser traído al debate de esta Cámara sin que previamente se expidan las comisiones respectivas.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: por vía del análisis de un proyecto sobre la Carta Orgánica del Banco Central hemos llegado al tema de las tarjetas de crédito. Comparto la posición sostenida por el señor diputado Miguel Ángel Balestrini en cuanto a que el inciso e) del artículo 47 no necesariamente se refiere a las tarjetas de crédito.

Sin perjuicio de ello, quiero resaltar un detalle importantísimo. La mayor parte de las tarjetas están siendo financiadas por los bancos, con lo cual será difícil evadir el control, si la Superintendencia lo realiza seriamente. Por este mecanismo los bancos destinan un porcentaje de sus fondos prestables para incentivar el consumo, que puede provocar efectos inflacionarios, en vez de dedicarlos para que la pequeña y mediana empresa incremente su producción.

Debemos volver al debate sobre la Carta Orgánica del Banco Central, dejando para otro momento el análisis del tema de las tarjetas de crédito.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: más allá de las observaciones del señor diputado Martínez Raymonda, quiero hacer algunas consideraciones con respecto a este inciso.

No compartimos la opinión expresada por el señor diputado Ibarbia. Cuando se debata integralmente el tema de las tarjetas de crédito, analizaremos cuáles son los efectos y la naturaleza de este instrumento.

Hagamos la siguiente hipótesis. Supongamos que American Express —una de las empresas más importantes en este ramo— extendiera el plazo de pago de la tarjeta de crédito de 25 a 60 días. ¿Qué fenómeno se produciría? Como

consecuencia del extraordinario poder que esa moneda tiene en el bolsillo de los ciudadanos, los comerciantes estarían obligados a vender a 60 días.

En estas circunstancias, no hay igualdad entre las partes. Esta desigualdad atañe a la naturaleza de la moneda a la que nos estamos refiriendo en términos generales. De cualquier manera, estamos otorgando universalidad a esta iniciativa. Queremos que este tema esté expresamente contemplado en la norma, porque tiene efectos monetarios. Por ello figura en el inciso e) del artículo 47.

La comisión y todos los que hemos trabajado en el proyecto estamos absolutamente convencidos de que esta es una manifestación económica que debe estar bajo el control y el análisis permanente del Banco Central.

Sr. Presidente (Martínez). — Oportunamente, se pondrá a votación el artículo 47.

En consideración el artículo 48. Si no se formulan observaciones se pasará a considerar el artículo 49.

En consideración el artículo 49. Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalia. — Señor presidente: antes de entrar al análisis del artículo 49 debo agradecer personalmente el gesto de caballerosidad del señor diputado Balestrini.

El artículo que examinamos faculta al superintendente, previa autorización del presidente del banco, a disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de una o varias entidades financieras. El segundo párrafo de ese artículo establece lo siguiente: "Durante este período serán nulos los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se suspenderá la exigibilidad y devengamiento de sus intereses. La suspensión transitoria de operaciones, en ningún caso dará derecho a los acreedores al reclamo por daños y perjuicios contra el banco o el Estado nacional".

Partiendo de un ejemplo claro, imaginemos que se trata de una suspensión parcial de actividades; es decir, algo que no trasciende con carácter general, algo que puede ignorarse. Sin embargo, el artículo 49 declara nulos los compromisos, e incluso agrega que se suspenderá el devengamiento de los intereses. O el compromiso es válido y devenga intereses que son suspendidos o el compromiso es inválido; entonces, ¿a qué intereses se está refiriendo el texto de este artículo?

Lo más grave —ya que sobre esto habrá muchas interpretaciones— es que luego se dice que la suspensión transitoria de operaciones en ningún caso dará derecho a los acreedores al re-

clamo por daños y perjuicios contra el banco o el Estado nacional. Este es un privilegio inaceptable. No puede sacarse al banco del derecho común. Es un principio de justicia adquirida el de la responsabilidad del Estado por sus hechos culposos, y con mayor razón si los hechos fueran dolosos. Por ejemplo, si luego de que el superintendente resolviera suspender las operaciones de una entidad resultara que esa suspensión fue injustificada, ¿por qué va a seguir siendo nulo el compromiso? ¿Por qué no va a devengar intereses? Y si fuera justificada, ¿por qué razón el que haya contratado con las autoridades del banco no tendrá derecho a ejercer acción en ningún caso? No dudo de que el banco por lo menos tendrá acción contra el Estado nacional, ni de que el particular damnificado tendrá la acción subrogatoria; pero no se trata de eso. Aquí se trata de la acción directa por los actos que comprometen la responsabilidad del Estado.

Dado que se trata de un tema delicado, solicito a la comisión que lo estudie con detenimiento y que luego emita su opinión.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: analizaremos por partes este artículo porque realmente —lo digo con el mismo espíritu con que lo expresé con anterioridad— nosotros valoramos profundamente la opinión del señor diputado que ha formulado estas observaciones.

Recuerdo que el proyecto en discusión ha sido sancionado por el Honorable Senado. Estos temas son opinables, y lo señalado por el señor diputado tiene su fundamentación legal.

El señor diputado se refirió al párrafo que dice: "Durante este período serán nulos los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se suspenderá la exigibilidad y devengamiento de sus intereses". Creo que efectivamente tendremos que revisar la redacción, porque el término 'sus' parece referirse a un hecho que de por sí está declarado nulo de nulidad absoluta.

Sr. Olivera. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Balestrini (M. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: para poner de relieve que este artículo merece comentarios desde varios puntos de vista. Las consecuencias de la cancelación o de la suspensión temporaria de las actividades de una entidad financiera no se agotan en los efectos jurídicos posteriores sino que también se vinculan con el hecho de que sea el superintendente —aunque tenga la

autorización del presidente del Banco— el que tenga la facultad para tomar una decisión tan trascendente.

Difícilmente pueda rehabilitarse en el mercado financiero una entidad que ha tenido una suspensión transitoria. Son pocos los casos de este tipo. Por esta razón, en nuestro dictamen de minoría habíamos suprimido este artículo 49. Al eliminar la facultad prevista en el primer párrafo del artículo, desaparecían las dificultades a las que atienden los párrafos siguientes. Por ello, me sumo a la sugerencia del señor diputado López de Zavalia de analizar este artículo con mucho cuidado, y en especial la cuestión de quién tiene la facultad de tomar una decisión tan trascendente para una entidad financiera como es la suspensión temporaria.

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa en el uso de la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Con respecto a la observación del señor diputado Olivera, cabe afirmar lo siguiente.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el superintendente y el vicesuperintendente son directores del Banco Central.

En segundo lugar, aquí se trata de cubrir circunstancias de emergencia que requieren una rápida decisión de la autoridad de aplicación.

En tercer lugar, el organismo que controla la existencia de estos fenómenos es la Superintendencia, y no el resto de los directores.

En cuarto lugar, debe mediar previa autorización del presidente del Banco.

Finalmente, la última parte del primer párrafo dice: "De esta medida se deberá dar posterior cuenta al directorio." Hay que tener en cuenta que según las enmiendas que hemos introducido al proyecto, el directorio es responsable por esta medida, aun cuando se le notifique con posterioridad, si no se opuso expresamente o hizo conocer explícitamente su desacuerdo.

En consecuencia, es el conjunto de todos estos elementos lo que ha dado fundamento a la decisión del Honorable Senado de incluir la suspensión de una entidad financiera como una facultad de la Superintendencia.

Con respecto a las observaciones formuladas por el señor diputado López de Zavalia la comisión quisiera que le hiciera llegar una propuesta concreta que de alguna manera contemplara sus apreciaciones, aunque sabemos que con relación a estas normas que estamos incluyendo existe —como se dice comúnmente— media biblioteca en un sentido y media biblioteca en otro. Por ello, con el ánimo de perfeccionar

cionar la redacción de esta disposición solicitamos al señor diputado López de Zavalia que nos haga llegar una propuesta concreta a efectos de que la comisión pueda considerarla y, si es posible, aprobar una norma consensuada cuando llegue el momento de la votación.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: nosotros también habíamos planteado observaciones al artículo 49. En primer lugar debo aclarar que el hecho de que tanto el superintendente como el vicesuperintendente sean ahora miembros del directorio del Banco Central —tal como lo habíamos propuesto nosotros— allana un poco el camino en el tema que estamos analizando.

Concretamente, el texto que proponemos —que entiendo ya obra en poder del señor diputado Balestrini— dice lo siguiente: “El superintendente podrá, previa autorización del directorio del banco,...” —y no del presidente del banco, como decía antes— “...disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de una o varias entidades financieras, por un plazo máximo de treinta (30) días.

“Por intermedio del presidente del banco, el superintendente podrá solicitar al directorio se revoque la autorización para operar de una entidad financiera. En tal caso el directorio deberá evaluar tal solicitud en un plazo máximo de quince (15) días corridos a partir del momento de la solicitud.

“Este plazo será prorrogable por única vez, por otros quince (15) días corridos.”

De este modo queda eliminado el último párrafo al que hace referencia el señor diputado López de Zavalia, que creemos que desde el punto de vista legal resulta un tanto conflictivo.

Sr. Presidente (Martínez). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 49.

En consideración el artículo 50.

—No se formulan consideraciones respecto de los artículos 50 a 59.

Sr. Presidente (Martínez). — Oportunamente se pondrán a votación los artículos 50 a 59 de la Carta Orgánica del Banco Central, incluidos en el artículo 1º del proyecto.

Sr. Balestrini (M. A.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: debe tenerse en cuenta que en el transcurso de la dis-

cusión solicitamos la inclusión de un artículo transitorio que habla de un límite del 20 por ciento durante la gestión del primer directorio.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Mario Carlos Brook.

Sr. Balestrini (M. A.). — El artículo mencionado —que pasaría a ser el número 60— dice así: “Fijase en un veinte por ciento (20 %) el límite de las reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda común que podrán estar integradas con títulos públicos valuados a precio de mercado, durante la gestión del primer directorio del banco designado de acuerdo con lo prescripto por esta ley.

“Sólo por necesidad de dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o por verse afectados los precios de mercado de los activos mantenidos como prenda común, la participación de títulos públicos mencionada en el párrafo anterior podrá llegar, transitoriamente, y hasta el límite establecido en el artículo 33. Tal circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación y no podrá extenderse por plazos superiores a los noventa (90) días corridos.”

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 60.

En consideración el artículo 2º del proyecto de ley, que contiene al artículo 34 de la ley 21.526 (de Entidades Financieras).

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: el presente artículo regula, entre otras cosas, las circunstancias en las cuales las entidades financieras tienen que presentar planes de regularización y saneamiento. A efectos de evitar discrecionalidad por parte del Banco Central nos parece oportuno solicitar la modificación del inciso c) del artículo 34 a fin de que en lugar de decir: “Registrara reiterados incumplimientos a los distintos límites o relaciones técnicas establecidas,” exprese lo siguiente: “Registrara tres incumplimientos continuados o seis alternados en el curso de un año calendario a los distintos límites o relaciones técnicas establecidas.”

El texto propuesto evitaría que esta norma se aplicara con discrecionalidad, dado que significa una exigencia muy seria para una entidad financiera presentar un plan de regularización.

Por otra parte, deseamos realizar una sugerencia con respecto al último párrafo del artículo en consideración, que señala: “El Banco Central de la República Argentina, a fin de facilitar el

cumplimiento de los planes de regularización y saneamiento o fusiones y/o absorciones, podrá admitir con carácter temporario excepciones a los límites y relaciones técnicas pertinentes; eximir o diferir el pago de los cargos y/o multas previstos en la presente ley. Esto, sin perjuicio de otras medidas que, sin afectar las restricciones que el cumplimiento de su Carta Orgánica le impone, propendan al cumplimiento de los fines señalados."

Entendemos que en los casos en que el Banco Central tome decisiones de esta naturaleza es necesario que informe al Congreso, ello en concordancia con nuestra postura de reforzar el control parlamentario sobre el Banco Central.

Por esta razón, proponemos que se incorpore un párrafo adicional a continuación del que acabo de referir que diga lo siguiente: "Sobre estas decisiones el presidente del Banco Central deberá informar al Honorable Congreso de la Nación, en la oportunidad del informe anual dispuesto por el artículo 10."

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini. — Señor presidente: con relación al primer planteo cabe señalar que estas modificaciones que estamos analizando, tal como lo hemos fundado —y ha existido opinión casi unánime de la Cámara—, están destinadas a evitar un conjunto de anormalidades que se produjeron y que significaron pérdidas muy cuantiosas al país, además de graves problemas al Banco Central.

La forma en que se ha estructurado el dispositivo legal en esta oportunidad —no hemos encontrado otra fórmula— requiere otorgar este margen de discrecionalidad a las autoridades del Banco Central. Entendemos que la especificación que plantea el señor diputado Olivera está destinada a limitar, de alguna manera, esa discrecionalidad, pero interpretamos que si la incluyéramos también estaríamos desnaturalizando el sentido de las facultades que otorgamos, porque no es posible evaluar en el dispositivo legal la magnitud de una vez o el efecto de tres veces, que pueden tener magnitudes totalmente distintas y efectos absolutamente diversos.

Con esto quiero decir que no se trata de cantidades, que no se trata de las veces que se violen las disposiciones, sino que fundamentalmente se alude a los efectos que las disposiciones —sea una, dos o cien veces— producen en esa institución y en el conjunto del sistema financiero.

En consecuencia, lamentablemente no encontramos una forma de satisfacer esta aspiración del bloque de la Unión Cívica Radical en este aspecto.

Con relación al segundo planteo, podemos acoger la propuesta formulada por el señor diputado Olivera en la medida en que la redacción que desde ya le pedimos que nos haga llegar esté encuadrada dentro del espíritu de lo que ha expresado en cuanto al tratamiento de este artículo.

Sr. Presidente (Brook). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo los señores diputados en las bancas, a efectos de que la comisión proceda a compatibilizar algunos aspectos vinculados con el contenido de los artículos que quedan por considerar.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 19 y 23.

—A la hora 19 y 30:

Sr. Presidente (Brook). — Continúa la sesión.

En consideración en particular el artículo 39 del proyecto aprobado en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: quisiera que la comisión me aclare si en este artículo hay una omisión involuntaria o un propósito deliberado.

En la denominada ley 21.383 el fiscal general de Investigaciones Administrativas estaba exceptuado del secreto bancario. Cuando se dictó la norma de facto bajo el ministerio del doctor Martínez de Hoz esto no fue incluido. Pero como estábamos ante dos normas de facto, no había ninguna contradicción. Ahora, sancionamos una ley.

En consecuencia, quisiera saber si esto es un error involuntario o si a la destrucción en los hechos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas le queremos dar la partida de defunción legal. Es decir, quiero que se me diga por qué no se incluye al fiscal general de Investigaciones Administrativas entre los funcionarios a quienes se exceptúa del secreto bancario.

Sr. Presidente (Brook). — La Presidencia aclara a los señores diputados que está en consideración el artículo 39 por el cual se introducen modificaciones a los artículos 39 a 53 de la Ley de Entidades Financieras. Sin perjuicio de que la comisión desee responder al señor diputado Molinas, como la consideración debe hacerse artículo por artículo, corresponde que en primer término la Cámara se aboque al tratamiento del artículo 39, sobre secreto bancario.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: dando que, como usted ha expresado, vamos a tratar artículo por artículo de este artículo 3º, la comisión propone la siguiente modificación. El artículo 3º del proyecto quedaría redactado así: "Modificanse el artículo 28, inciso a), y los títulos V, VI y VII de la ley 21.526 (de entidades financieras) y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera: ...".

Entonces, para seguir con el ordenamiento de la Ley de Entidades Financieras, en lugar de comenzar con el artículo 39 de dicha norma habría que hacerlo con el artículo 28, inciso a), que es el agregado que se propone. Este último expresaría textualmente: "Explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales, agropecuarias o de otra clase, salvo con expresa autorización del Banco Central, quien la deberá otorgar con carácter general y estableciendo en la misma límites y condiciones que garanticen la no afectación de la solvencia y patrimonio de la entidad".

Lo que pretendemos es lograr la flexibilización de una norma que prohíbe sin ningún tipo de excepción la realización de estas actividades. Esta flexibilización, con todos los condicionamientos que se le efectúan, permitirá resolver un conjunto de problemas importantes que se les vienen planteando a las entidades financieras en todo el país.

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 28, inciso a), de la Ley de Entidades Financieras, que se incorpora al artículo 3º del proyecto aprobado en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: el inciso a) del artículo 28 de la Ley de Entidades Financieras tendía a proteger el patrimonio de las entidades impidiendo que incursionaran en terrenos que se supone conocen menos o que les hagan arriesgar su patrimonio, que en última instancia es la garantía de los ahorristas. Considero conveniente que de aprobarse esta modificación se incorpore a continuación un texto que exprese que cuando ello ocurriera la Superintendencia deberá adoptar las medidas conducentes a garantizar un particular control de estas actividades.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: la comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado Olivera, y por su intermedio le solicita que nos haga llegar el texto.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el nuevo inciso a) del artículo 28 de la ley 21.526 (de entidades financieras).

En consideración el artículo 39.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: en la consideración en general de este proyecto de ley expresamos las razones por las que discrepamos con el dictamen de mayoría respecto del secreto reglado por el título V de la ley 21.526.

Según jurisprudencia de la Corte Suprema el secreto bancario se fundamenta en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla de la inviolabilidad de los papeles privados. En nuestra Carta Magna no existe una distinción entre operaciones activas y pasivas, ambas son papeles privados. Sin embargo, la tendencia mundial es hacia la flexibilización del secreto bancario.

Coincidimos en que es necesaria una mayor flexibilización del secreto bancario, pero no encontramos las razones para limitarla a las operaciones activas y no a las pasivas. Creemos que el argumento que se ha brindado de que el hecho de que las operaciones activas de los bancos sean públicas puede permitir una mejor evaluación de las entidades financieras por parte de la opinión pública, no vale para los pequeños y medianos inversores.

Por otra parte, las cuestiones de público conocimiento relativas a la evasión fiscal, el problema del lavado de dólares y otros equivalentes muestran la necesidad de flexibilizar con mayor razón la información sobre las operaciones pasivas que las activas.

Por lo expuesto, insisto en que no coincidimos con esta separación entre operaciones activas y pasivas aunque sí con la tendencia que se observa en otras legislaciones y que también recoge esta norma de flexibilizar el tratamiento del secreto bancario.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: quisiera que el miembro informante respondiera a la pregunta que formulara anteriormente respecto del nuevo artículo 39 de la ley 21.526.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: el fundamento conceptual que inspira la disposición del secreto bancario es el siguiente: en nuestro país existe una legislación general, que otorga derechos y obligaciones, y respecto de este tema de la información o de las obligaciones de informar sobre las actividades comerciales o de cual-

quier naturaleza existen, por lo tanto, principios generales. Dichos principios generales son conocidos; suponen la reserva, salvo que una ley especial disponga que una persona está obligada a brindar información respecto de algún tema en particular.

El mecanismo de organización de esta cuestión en la legislación es muy simple: si no hay algo que justifique la norma específica, rige la norma general. Lo que hay que fundamentar es la norma en particular, es decir la específica que modifique al contenido de la legislación general aplicada para cualquier empresa o para cualquier ciudadano en la Argentina.

Hecha esta consideración, pasemos al tema concreto de las operaciones bancarias. No existe fundamento alguno que nos indique por qué hay que exigir a un banco que no dé a conocer sus operaciones crediticias, sus operaciones activas. No existe ningún fundamento que en particular pueda motivarnos a dictar una legislación de excepción respecto de la naturaleza de estas operaciones. Esto en cuanto al ordenamiento jurídico sustancial.

En cuanto a los hechos concretos, esta limitación para informar respecto de las operaciones activas podía tener alguna coherencia —esto lo planteo como segundo elemento porque el primero es el que acabo de señalar— y alguna explicación. Podría decirse que “cerraba”, término que suele utilizarse en la actualidad, cuando existió el sistema de garantía de depósitos, ya que los ciudadanos no tenían ninguna necesidad de saber a dónde depositaban la plata y los bancos tampoco tenían necesidad de hacer conocer la solvencia que está dada en un 95 por ciento en la forma en que colocaban el dinero.

Con la existencia de la garantía estatal irrefracta de los depósitos, esta norma, que aun así constituía un error —porque era una excepción sin fundamento a la norma general—, podía coexistir. Pero si nosotros ahora la hiciéramos coexistir tendríamos que decir a la gente, por un lado, que se fijen dónde colocan el dinero y por el otro, que no hay ninguna posibilidad que se fije, porque es secreto, dónde destinan el dinero los bancos.

Si queremos ver la cuestión desde la óptica de los banqueros, les diríamos que deben ser eficientes y colocar el dinero en un lugar de manera de no desequilibrar el sistema financiero. Eso por un lado, pero por el otro les estaríamos diciendo que de nada vale que sean eficientes, porque no van a poder expresar su eficiencia para lograr que el conjunto de la sociedad se lo valore, y al mejorar la negociación la gente les

tenga confianza y deposite porque administran bien los fondos de terceros.

En esta lógica jurídica mencionada no existe fundamento alguno que nos indique que las operaciones activas de los bancos deben estar protegidas con el secreto bancario, ya sea que éste juegue como atributo de información por parte del banquero o como necesidad de información por parte de los depositantes.

Con relación a lo que ha expresado el señor diputado Olivera, y que ha sido preocupación de la comisión en cuanto a que los pequeños inversores no tienen acceso a esta información, hemos creado el sistema de protección de los depósitos, que protege a aquellos inversores por un monto inferior al que se ha establecido.

Existen razones que fundan la excepción para las operaciones pasivas. Es decir que existen argumentos para crear una norma de excepción al principio general, colocando a los depositantes bajo la protección del secreto bancario.

En primer lugar, en todos los sistemas bancarios del mundo existe una gran sensibilidad con respecto a este tema. Tanto es así que en la mayoría de ellos existe protección de la información en materia de operaciones pasivas. Este argumento por sí solo justifica la excepción a la norma general, porque si levantáramos el secreto bancario para las operaciones pasivas, colocaríamos al sistema financiero argentino en desventaja con relación al resto de la legislación mundial y, especialmente, con respecto a los países que pueden competir en materia de depósitos con nuestro sistema bancario, como Uruguay, Chile, Brasil, etcétera.

Estos son los fundamentos por los cuales hemos estructurado este sistema, donde mantenemos el secreto bancario sólo para las operaciones pasivas.

Con relación al contenido del artículo, quiero expresar que la comisión no ha cambiado ningún dispositivo, salvo el que nos hemos referido. No hemos ampliado ni cercenado obligaciones, derechos o responsabilidades de las instituciones con relación a este punto. Si existiera una norma que dispusiera que el secreto bancario no es oponible a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, esa ley seguiría en vigencia.

Sinceramente, la comisión no ha trabajado sobre este tema, porque no era su misión específica analizar los alcances del secreto bancario en relación a quienes están exceptuados del mismo. Tanto es así que en cuanto a las facultades de la Dirección General Impositiva, se tomaron los preceptos de la ley 23.271 del 27 de septiembre de 1985, independientemente de la Carta Orgánica del Banco Central de la Repú-

blica Argentina. Lo único que ha hecho la comisión es utilizar una técnica legislativa adecuada para incorporar la misma disposición que sancionó este Congreso.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: frente a esta manifestación del señor diputado por Córdoba, quisiera saber si subsiste lo dispuesto por la ley 21.383 en cuanto a las atribuciones del fiscal general.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: no hemos derogado ninguna disposición. Simplemente hemos tomado la ley 23.271 y la hemos adecuado en función de una buena técnica legislativa. Las demás legislaciones que pueden tener relación con este tema no las hemos tenido en consideración ni han sido objeto de derogación o modificaciones. Espero que el señor diputado haya quedado satisfecho con esta aclaración.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: el tema del secreto ha sido debatido ampliamente en la comisión. A nosotros nos queda la duda respecto de la aplicación de esta norma en lo relativo a los requerimientos de información que formule la DGI. Si bien es cierto que existe la ley 23.271 —tal como lo puntualizara el señor miembro informante de la comisión—, a partir del año 1989 las facultades de la Dirección General Impositiva en cuanto al contralor de los contribuyentes han crecido en una magnitud tal, que le ha permitido conseguir resultados importantes desde el punto de vista de la recaudación fiscal. Nosotros dudamos de que esa norma deba estar contenida en este proyecto de ley y creemos que debería estar inserta en la Ley de Procedimientos Tributarios.

También tenemos el interrogante en cuanto a qué podría sucederle a un banco en materia de pérdida de depósitos si a la DGI se le ocurriera solicitar información relacionada con los depósitos de todos sus clientes, lo cual es una facultad que tiene por aplicación de la ley 23.271. Creemos que es excesiva esta atribución que se concede a la DGI, pues podría darse el caso de que un banco pierda depósitos en favor de otro al que no se le ha requerido información.

Dejamos planteado este tema y en su momento acercaremos algunas propuestas a la comisión.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el artículo 39.

En consideración el artículo 40.

Si no se formulan observaciones, se pasa a considerar el artículo 41.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — La comisión propone que, en el segundo párrafo, donde dice: "Las sanciones serán aplicadas por el presidente del Banco Central de la República Argentina..."; se agregue: "... o la autoridad competente,..." continuando luego tal como está redactado.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se someterá a votación el artículo 41.

En consideración el artículo 42.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Arias. — Señor presidente: solicito al señor miembro informante de la comisión una aclaración en cuanto a la distinción que se hace entre la prescripción de la acción que nace de las infracciones, que operará a los seis años de la comisión del hecho, y la prescripción de la multa, que operará a los tres años, por lo que habría un problema de incongruencia.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: sin perjuicio de que se pueda buscar una redacción más feliz, aclaro que los seis años están referidos a la posibilidad que se tiene de la acción. Eso trae aparejado el proceso, y luego, la penalización. Los tres años se vinculan con la pena, que siempre será posterior a la acción. Creo que la observación es correcta en el sentido de que se puede presentar alguna discrepancia en este tema. Le pediría al señor diputado Arias que dé a su propuesta una redacción más feliz.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: a base de las palabras del señor miembro informante, entiendo que en este tipo de prescripción deberían transcurrir nueve años para que el infractor quede liberado.

Asimismo, propongo que, en el último párrafo del artículo, en vez de decir "... a partir de la fecha de su notificación.", se exprese "... a partir de la fecha de la notificación de dicha sanción firme."

Sr. Balestrini (M. A.). — La comisión está de acuerdo con la última propuesta.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se votará el artículo 42.

En consideración el artículo 43.

—No se formulan consideraciones respecto de los artículos 43 a 48.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se votarán los artículos 43 a 48.

En consideración el artículo 49.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalia. — Señor presidente: una simple observación que concierne simultáneamente al artículo 49 y al artículo 53. Me refiero al uso de la expresión "moneda local". Interpreto que se ha recogido alguna observación que hice cuando se discutió la Ley de Convertibilidad, que modificara disposiciones del Código Civil pretendiendo que la moneda extranjera era igual que la moneda argentina. En aquella oportunidad señalé que por disposiciones de equivalencia que se establecieran, siempre habría diferencias entre ambas monedas. Entiendo que por "moneda local" el proyecto quiere decir "moneda argentina", pese a lo que diga la Ley de Convertibilidad.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: según la Ley de Entidades Financieras vigente, la liquidación es una función que se cumple a través del Banco Central, y los liquidadores son funcionarios de esta institución. En el nuevo régimen —volviendo al artículo 48— estas responsabilidades pasan a los auxiliares de la Justicia, con honorarios que se determinarán de acuerdo con los estatutos legales pertinentes y que por ende se correlacionarán sistemáticamente con la magnitud del capital en giro.

Quiero que se tome conciencia de la significación económica de los valores a los que potencialmente llegarán las regulaciones de honorarios profesionales por el desempeño de estas funciones, si se mantiene la actual redacción. No veo razones para modificar el sistema vigente, puesto que la opinión pública no ha planteado cuestionamientos al desempeño de los funcionarios liquidadores del Banco Central. Pero si por razones de otra índole se sugiere el mantenimiento de esta redacción habría que determinar cuál es el límite de retribución que van a tener estos liquidadores.

Agradecería al señor miembro informante que nos diera alguna opinión sobre el particular.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: en primer lugar quiero aclarar que mientras el señor diputado Arias estaba haciendo uso de la palabra debí abocarme a una modificación muy importante al artículo 49 que ha sido consensuada, por lo que primero me referiré a este punto para

luego sí volver sobre el artículo 48 y hacer el análisis correspondiente.

La comisión propone que el inciso d) del artículo 49 diga así: "Sobre los fondos que la entidad liquidada tuviese depositados en concepto de encaje por efectivo mínimo en moneda local, los depositantes en dicha moneda tendrán un privilegio especial, exclusivo y excluyente, para la satisfacción de su crédito, conforme a la siguiente prelación:

"Hasta la suma de tres mil pesos (\$ 3.000) por persona, gozando de este privilegio especial una sola persona por depósito.

"Sobre el remanente, la totalidad de los depósitos constituidos por personas, con una antelación mayor a los 180 días de la fecha de revocación de la autorización para funcionar."

Concretamente, señor presidente, proponemos la supresión de la palabra "físicas" y la modificación de mil por tres mil.

Ahora, con las disculpas del caso, pediría al señor diputado Arias que volviéramos a analizar el artículo 48, con este modo tan particular de considerar el presente proyecto de ley que hoy nos hemos visto compelidos a adoptar dadas las circunstancias que nos rodean.

Sr. Presidente (Brook). — La Presidencia solicita al señor diputado Arias que puntualice nuevamente su objeción.

Sr. Arias. — Señor presidente: mi inquietud gira en torno del tema de no generar una nueva fuente de enriquecimiento, porque si tomamos en consideración el volumen de las entidades que potencialmente se van a someter a liquidación, los honorarios de estos funcionarios judiciales serán sumamente cuantiosos y podríamos estar involuntariamente posibilitando la realización de actos no regulares o, si bien no quiero calificarlos de ilícitos, estarían muy próximos a esa categorización jurídica.

En consecuencia, entiendo que el sistema de liquidación a través del Banco Central funcionaba con normalidad y sin cuestionamientos por parte de la opinión pública. No conozco procesos penales donde estos funcionarios judiciales se encuentren involucrados. El sistema podría mantenerse, pero si hace a la norma la transferencia de esta responsabilidad al fuero comercial, tal como está establecido en la ley, habría que determinar un límite en estas contribuciones que vamos a posibilitar a los liquidadores judiciales.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: es atendible el planteo formulado por el señor dipu-

lado por Buenos Aires, pero tendríamos que analizar propuestas concretas.

Debemos tener en cuenta que las disposiciones bajo análisis prevén en el caso de los sindicatos que los honorarios se fijarán por el trabajo efectivo que realizan.

Ha sido preocupación de la comisión analizar el tema planteado por el señor diputado Arias, pero la única manera que hemos encontrado de concretarlo en una disposición legal ha sido fijando que los honorarios se establezcan en función de la tarea efectivamente realizada. Por ello, en el último párrafo del artículo 45 se señala: "Los honorarios de los peritos y/o auxiliares que el juez interviniente pudiere designar a los fines del presente artículo deberán fijarse en función de la efectiva tarea fijada por aquéllos, con absoluta independencia de la cuantía de los activos, pasivos y/o patrimonio de la entidad".

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: en relación con el inciso d) del artículo 49 debo manifestar que coincidimos con la necesidad de aumentar el monto del privilegio sobre los encajes, a pesar de que en más de una oportunidad dijimos que resultaba insuficiente.

Asimismo, hemos señalado —y lo reiteramos ahora— que resultaría conveniente adoptar un régimen de garantía completamente distinto al que igió en el país durante tantos años y que acarreo nefastas consecuencias. Me estoy refiriendo al régimen de garantía irrestricta. En su reemplazo propiciamos un sistema de garantía parcial, obligatoria, onerosa y autofinanciada que parte de la base de una intensa acción por parte de la Superintendencia.

Estimamos que el régimen que hemos propuesto protege mejor al pequeño y mediano ahorrista dado que establecemos un límite de 20.000 pesos. Al mismo tiempo, se adecua más estrechamente a la legislación comparada y responde, por otra parte, a los postulados del artículo 3º de la Ley de Emergencia Económica, que refiriéndose a este tema habla de la necesidad de establecer un régimen de garantía de los depósitos.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: atento a las explicaciones brindadas creo que sería útil dejar claramente establecido que esta restricción referida al monto de los honorarios, donde el mecanismo para su fijación tiene un carácter limitativo, pues se refiere sólo al supuesto del artículo 45, sea también aplicable para el caso previsto por el artículo 48.

Sr. Presidente (Brook). — ¿Acepta la comisión la modificación que se propone con relación al artículo 48?

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: el principio es el que se acaba de explicitar. Lo que haría falta es una redacción apropiada para el agregado que se propicia, pero estamos de acuerdo con la sugerencia de que los honorarios se tienen que regular en función de la tarea efectivamente realizada.

Vale decir que si no hemos sido muy felices con la redacción, podemos mejorarla para que queden comprendidos todos los casos. Por consiguiente, propongo el siguiente agregado, que iría como último párrafo del artículo 48: "Los honorarios del liquidador judicial se fijarán también en función de la efectiva tarea realizada, con absoluta independencia de la cuantía de los activos, pasivos y/o patrimonio de la entidad".

En cuanto a la cuestión a que ha aludido el señor diputado Olivera, debo decir que el sistema de protección de depósitos que proyectamos y que fue objeto de profundo análisis por los diputados de la comisión, a nuestro criterio es correcto.

En primer lugar, logramos un sistema de protección real, efectivo, para todos aquellos depositantes de menos de tres mil pesos por institución bancaria, lo cual significa que teniendo la precaución debida los pequeños ahorristas podrían depositar hasta tres mil pesos por entidad, contando con una protección para sumas aun mayores.

En segundo término, establecemos también una misma jerarquía de protección para aquellos depósitos de más de 180 días.

Este sistema tiene la virtud de que no interfiere en la organización del sector financiero, no estableciendo privilegios para ningún banco en particular ni para algún tipo de bancos, o sea que es neutro respecto de las entidades financieras.

A su vez, presenta la ventaja de que de ninguna manera la protección afecta a la riqueza del conjunto de los argentinos, porque está referida exclusivamente al patrimonio de la entidad. Asimismo, si pudiéramos analizar aquí cómo funciona este dispositivo en la práctica, llegaríamos a la conclusión de que para las personas que quedan incluidas dentro de este sistema de seguridad la garantía es total y absoluta, y aclaró que son muy pocos los sistemas que pueden lograr la conjunción de todos estos elementos.

Es una garantía total y absoluta que no discrimina entre bancos, que no establece una norma que premie a unos y castigue a otros res-

pecto a instituciones financieras, que no afecta al patrimonio del conjunto de los argentinos y que genera una norma de protección efectiva para los pequeños ahorristas —a los que realmente hay que proteger— que no pueden, como bien dice el señor diputado Olivera, tener acceso a la información respecto de la solvencia de los distintos componentes del sistema financiero.

Entendemos que el mecanismo elaborado es el adecuado, por lo que solicito a los señores diputados que voten afirmativamente el artículo 49 tal cual está redactado, ya que —sinceramente— ha sido analizado en profundidad y con el ánimo de construir algo que sirva a la gente.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se someterá a votación el artículo 49.

En consideración el artículo 50.

—No se formulan consideraciones respecto de los artículos 50 a 55.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se votarán los artículos 50 a 55.

Sr. Balestrini (M. A.). — Pido la palabra para proponer un nuevo artículo.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: proponemos un nuevo artículo 49 que, a iniciativa del señor diputado Loutaif, establece lo siguiente: "Facúltase al Banco Central de la República Argentina para establecer los términos y condiciones bajo los cuales las entidades financieras podrán utilizar sistemas de reproducción en fotografías, microfilmaciones o cualquier otro método de reproducción electrónica de documentos que merezcan ser conservados, en atención a su valor legal, fiscal, informativo, administrativo o histórico, los que serán considerados copias auténticas con valor probatorio, siempre y cuando sean certificados por funcionarios con responsabilidad en la custodia de los mismos.

"Las entidades financieras deberán reintegrar los cheques pagados al librador en los plazos y condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina en su reglamentación.

"En general, toda documentación cuya reproducción se admita según lo establecido precedentemente, previo a su destrucción física, deberá ser puesto a disposición de los interesados en los plazos y condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina."

Esta norma es de una practicidad total y absoluta. En primer lugar, permite a los bancos re-

solver un problema muy serio, como es el que se relaciona con el archivo de la documentación, y nos coloca en la posibilidad de utilizar los avances tecnológicos, ya que no podemos quedar rezagados en ese sentido. Pero fundamentalmente rescato de esta disposición —la de que los bancos deban devolver los cheques a los libradores— un gran sentido práctico para el ordenamiento de la documentación que acredita las operaciones de quienes tengan cuenta corriente. Fíjense que a partir de una disposición de esta naturaleza la cuenta corriente bancaria puede significar un sistema de ordenamiento de la documentación e incluso de la vida económica de las personas. Al tener la precaución de utilizar cheques para efectuar pagos importantes, las personas pueden encontrar en este mecanismo que ponemos en funcionamiento un sistema ordenador de su propia contabilidad personal, por llamarlo de alguna manera. Pero, además, todos los ciudadanos que tengan cuenta corriente podrán tener siempre a disposición el comprobante que indica que han pagado las obligaciones, el que tendrá todo el valor legal que le otorga la norma.

Por lo expuesto, entiendo que esta iniciativa va a tener importantes efectos prácticos.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: creo que son suficientes las consideraciones que acaba de formular el señor diputado Balestrini, quien también es firmante de este proyecto. Por lo tanto, sólo resta expresar mi satisfacción por el hecho de que esta iniciativa haya encontrado eco favorable en el seno de la comisión.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: quiero aclarar que además hemos receptado la propuesta de agregar como segundo párrafo de este artículo el siguiente texto: "Deberá figurar impreso en el cuerpo de los cheques el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), o en su defecto el número del documento de identidad del titular de la cuenta corriente, de acuerdo a las disposiciones que el Banco Central establezca al respecto".

Si el diputado Loutaif acepta que hagamos este agregado estaríamos cumpliendo con una petición originada en la necesidad de dotar a la Argentina de un buen sistema de administración tributaria.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: estoy de acuerdo con el agregado que se propone pues de alguna manera permite identificar inequívocamente al librador del cheque.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el nuevo artículo 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Crostelli. — Señor presidente: proponemos un nuevo artículo —que sería el 5º—, que sería el siguiente: "Modifícanse los siguientes artículos de la ley 19.359, texto ordenado en 1982:

"Artículo 8º: Reemplázase el texto del primer párrafo, por el siguiente: 'El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo el proceso sumario, el que hasta la conclusión de la causa para definitiva no podrá exceder del plazo de trescientos sesenta (360) días hábiles, a contar desde la fecha de resolución de la apertura del sumario.'

"Reemplázase el texto del tercer párrafo por el siguiente: 'La sustanciación del proceso estará a cargo de una dependencia jurídica del banco, la cual recibirá la causa a prueba, producirá la que considere oportuna para mejor proveer, dictará las resoluciones que sean necesarias hasta la conclusión de la causa para definitiva y elevará las actuaciones al presidente del banco para remitirlas al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal, o al Federal con asiento en la provincia, según corresponda.'

"Reemplázase el texto del cuarto párrafo, inciso d), por el siguiente: 'El Banco Central de la República Argentina deberá remitir las actuaciones al juzgado correspondiente, dentro de los quince (15) días de vencido el plazo dispuesto en el inciso anterior.'

"Elimínase la primera parte del texto del cuarto párrafo, inciso e).

"Artículo 9º: Reemplázase el texto de este artículo, por el siguiente: 'El juzgado nacional de primera instancia que resulte competente resolverá sobre las impugnaciones efectuadas, sin otra sustanciación, salvo las medidas que estime útiles para mejor proveer. También podrá practicar las pruebas que hayan sido denegadas por la jurisdicción administrativa, cuando el impugnante hubiese insistido en ellas al interponer el recurso y el juzgado decidiese su procedencia. Estas pruebas se producirán dentro del plazo de veinte (20) días. La sentencia deberá dictarse dentro del término de los cincuenta (50) días siguientes.

"Las resoluciones definitivas dictadas por el juzgado interviniente, serán recurribles con efecto

de suspensivo ante la respectiva cámara del fuero, dentro de los diez (10) días de su notificación.

"El recurso de su apelación deberá interponerse y fundarse ante el juzgado interviniente, el cual lo elevará a la Cámara, juntamente con el sumario, en el término de diez (10) días.'

"Artículo 14: Reemplázase el texto de este artículo, por el siguiente: 'La ejecución de pena de multa impuesta en los supuestos previstos en la presente ley, estará a cargo del Banco Central de la República Argentina y tramitará conforme al régimen previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para las ejecuciones fiscales. Constituirá título suficiente la copia simple de la resolución condenatoria, certificada por el secretario del tribunal, suscripta por dos firmas autorizadas del Banco Central de la República Argentina.'

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el nuevo artículo 5º propuesto.

Sr. Crostelli. — Pido la palabra para proponer otro artículo nuevo.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Crostelli. — Propongo que se incorpore un nuevo artículo, que sería el 6º, con el siguiente texto:

"Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días corridos de la vigencia de la presente ley, todos los sumarios de la naturaleza aludida en el artículo 5º, que tramitan por ante el Banco Central de la República Argentina deberán ser concluidos, elevando la causa para definitiva al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal, o al Federal con asiento en la provincia, según corresponda."

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: quizás abusando de esta modalidad que hemos acordado hoy, solicito por su intermedio que con posterioridad a la finalización de la reunión se nos haga llegar el texto que acaba de dar lectura el señor diputado Crostelli a efectos de poder sugerir oportunamente las modificaciones que entendamos pertinentes.

Sr. Presidente (Brook). — Oportunamente se pondrá a votación el nuevo artículo 6º.

En consideración el artículo 4º del proyecto aprobado en general, que pasa a ser 7º.

Si no se hace uso de la palabra se pasa a considerar el artículo 8º.

Sr. Crostelli. — Pido la palabra para proponer otro nuevo artículo.

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Crostelli. — Señor presidente: el texto que propiciamos para este nuevo artículo, que sería el 8º es el siguiente: "Las restricciones fijadas por la presente ley no son de aplicación en lo que se refiere a las actividades del Banco Central de la República Argentina, como síndico liquidador de las ex entidades existentes al momento de entrar en vigencia la presente ley, las que continuarán liquidándose conforme a las normas vigentes hasta el momento".

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 9º (5º del dictamen de mayoría).

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: reitero las consideraciones señaladas con respecto al artículo anterior, propuesto y leído por el señor diputado Crostelli, a los efectos de interiorizarnos mejor del contenido y poder concordar, en la medida de lo posible, una redacción satisfactoria para ambos.

Sr. Crostelli. — El artículo 9º corresponde al artículo 5º del dictamen de mayoría.

Sr. Olivera. — Me estoy refiriendo a todos estos artículos que han sido leídos recientemente, de los cuales teníamos conocimiento que se harían propuestas y desconocíamos el texto definitivo.

Sr. Presidente (Brook). — En consideración el artículo 10 (6º del dictamen de mayoría).

Si no se formulan observaciones, se pasa a considerar el artículo 11 (7º del dictamen de mayoría).

Si no se formulan observaciones se pasa a considerar el artículo 12 (8º del dictamen de mayoría).

El artículo 13 (9º del dictamen de mayoría) es de forma.

En razón de la modalidad adoptada y no habiendo quórum para votar, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20 y 23.

FULVIO F. RAMOS
Director del Cuerpo de Taquígrafos.